

TRABAJO FINAL DE GRADO
GRADO EN, HUMANIDADES: ESTUDIOS INTERCULTURALES



Límites a la participación ciudadana:

Un estudio sobre la descomposición de la
democracia, sus principios e instituciones.

Realizado por:

Lucía Beamud Villanueva

Tutorizado por:

Dr. Andrés Piqueras Infante

Resumen

En el presente trabajo de investigación se tratará de dar respuesta a por qué se limita la participación política a la ciudadanía, siendo que esta es la que legítimamente posee el poder político. Así el trabajo se encuentra estructurado en tres partes. En primer lugar, comparando diferentes épocas y sus argumentos, se podrá ver que esa limitación proviene del miedo de las clases altas hacia las clases bajas, y especialmente a que éstas irrumpieran en el poder, aportando las medidas e instrumentos que han ayudado a impedir el acceso político a las clases trabajadoras. En segundo lugar, se analizará el artificio simbólico creado que compone el sistema representativo y su contradicción interna, así como la relación entre la clase hegemónica a partir de las revoluciones contemporáneas y la apropiación de las instituciones y valores democráticos. Por último, en la tercera parte, se rastrearán las razones límites impuestos a la soberanía popular y nacional en España, analizando los procesos que conducen a ello.

Palabras clave

Participación política, clases trabajadoras, propiedad, soberanía.

Abstract

In the present research work we will try to give answers to the fact that political participation gets restricted to the citizens, being that they legitimately own the political power. This work has been organized in three parts: First one, comparing different periods and its arguments, it will show us that limitation comes from the fear from the upper class seeing the lower class assuming the power, providing them with measures and instruments than have helped them to prevent working class accessing into politics; in the second place, the artificial trick that forms the representative system and its internal contradiction will get analyzed in detail, just as the relationship between the hegemonic class since contemporary revolutions and the misappropriation of institutions and democratic values. Finally, in the third part, it will get established the reasons for Spain losing popular and national sovereignty, by analyzing the tools for executing that aim.

Key words

Political participation, working class, property sovereignty.

Agradecimientos

Este trabajo no es solo mío,
es de todas esas personas que me dieron alas
para poder crecer.

Doble agradecimiento a todas ellas,
por enseñarme el valor de la empatía
y la conciencia de clase.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	9
2. DEMOCRACIA.....	13
2.1 Titularidad de la democracia	13
2.2 ¿Cómo impedir el acceso al poder político de las clases trabajadoras?	17
2.2.1 <i>El gobierno mixto, Aristóteles.</i>	21
2.2.2 <i>Algunas barreras al poder político de las clases bajas.</i>	22
3. ORIGEN DE LA CRISIS DEL SISTEMA REPRESENTATIVO Y SECUESTRO DE LA VOLUNTAD GENERAL	29
3.1 El origen de la Crisis de la Representación	29
3.1.1 <i>Paradoja interna</i>	32
3.2 Secuestro de la voluntad general.....	34
3.2.1 <i>Paradoja externa</i>	38
4. ATADO Y BIEN ATADO.....	43
4.1 Pérdida de soberanía: España	44
4.1.1 <i>Constitución y técnicas que anulan la soberanía popular</i>	46
5. CONCLUSIONES	51
BIBLIOGRAFÍA CITADA	55

1. INTRODUCCIÓN

Ver y reflexionar. Esos parecen ser los pasos que se deben llevar a cabo para poder actuar; ver-reflexionar-actuar. Pero a veces partir de la acción para luego reflexionar y, nuevamente, volver a la acción puede producir efectos positivos. Acción-reflexión-acción conlleva a subirte a una espiral que abre infinidad de posibilidades prácticas. Dado que de alguna forma te invita a reflexionar sobre la práctica que se va haciendo, potencia el movimiento.

Este ha sido el motor que me ha conducido a fundar (junto con más compañeras) una asociación de vecinos, recoger el gran reto de cambiar el rumbo de más de once años sin una organización social en el territorio, ser su presidenta, trabajar codo a codo en la Confederación de Asociaciones Vecinales y de Consumidores de la Comunidad Valenciana (CAVE-COVA) y estar, en mi presente más reciente, en la institución pública.

En esta práctica he sido testigo de la opacidad e inoperatividad de nuestras instituciones. Más en concreto de las Juntas Municipales de Distrito de la Ciudad de València – un órgano territorial fundado para la descentralización de la gestión municipal que había de servir, a su vez, para una efectiva participación ciudadana. El cual ha acabado por ser una extensión del Pleno del Ayuntamiento, sin representar una total descentralización. En definitiva, se han convertido en espacios teatralizados e instrumentalizados, en unos lugares que más que invitar a la participación la desincentiva.

Todo ello me ha llevado a debatir con compañeras, y conmigo misma, acerca del fenómeno de *lo político* y *la política*. Fruto de estas discusiones surge el planteamiento y la formulación del problema que se plantea en este trabajo: si se supone que el titular del poder político en la democracia reside en el pueblo, ¿por qué se limita la cantidad y/o las posibilidades de acceso al poder político a la mayoría de la población?, ¿por qué el pueblo, siendo el soberano legítimo, se encuentra limitado en cuanto al ejercicio de su soberanía?

Con tal de dar respuesta a este problema el nivel de investigación que he empleado ha sido explicativo. Pues con este método es posible buscar las respuestas esperadas de los hechos mediante el establecimiento de causas-efectos. La base teórica sobre la que se sustenta este trabajo se encuentra en el republicanismo democrático. Que tiene como eje rector devolver el protagonismo a la ciudadanía. Teniendo en cuenta que para que ello

se dé, el individuo ha de ser completamente libre. Libre y autónomo para tomar decisiones, sin la interferencia de circunstancias o personas terceras. Un hecho que es imposible de gestionar si uno está en una situación de vulnerabilidad, pobreza, explotación y/o sumisión. El republicanismo democrático es inclusivo, pues trata de incluir a toda la ciudadanía proponiendo medidas para que todas las personas podamos ser libres. Haciendo extensibles los valores democráticos de libertad e igualdad.

En este sentido, en gran parte de las fuentes utilizadas se encuentran autores con una fuerte base republicana democrática como: Antoni Domènech (2004; 2018), M^a Julia Bertomeu (2005; 2018), Andrés de Francisco (2001; 2005), Daniel Raventós (2005), Jordi Mundó (2018), Javier Peña (2005), Philip Pettit (1997; 2005) o Fernando Aguiar (2005).

Así, también he recurrido a autores que me permitiesen tener una visión más amplia sobre dos fenómenos muy actuales como son la democracia participativa y la crisis del sistema representativo: José Acosta (1998), Norberto Bobbio (2001), Luciano Canfora (2003), Enrique Cebrián Zazurca (2013), Pedro de Vega (1998), Chantal Mouffe (1999), Alfredo Ramírez Nardiz (2012; 2014), M^a Reyes Pérez Alberdi (2008), Miguel Sánchez Morón (1980) y José Rubio Carracedo (2007).

Por último, con tal de comprender con mayor profundidad las causas materiales e históricas que han producido el estrechamiento en el ejercicio real de la democracia, me he apoyado en los siguientes autores: Aristóteles (2014), Mario Ascheri (2003-2006), Joan E. Garcés (2012), Carlos Berzosa (1999; 2009), David Held (1997), Roberto Gargarella (2003), Andrés Piqueras (2014; 2017; 2018), Enric Sebastià (1987; 1991), Pedro Malatesta (2015), Esteban Mercatante (2018), Jaime Escamilla Hernández (2004) o Karl Marx (1989).

El trabajo se encuentra dividido en tres partes: la primera titulada *Democracia*, donde aparecerá la formulación del problema. Por qué se trata de limitar la participación política. Comparando diferentes épocas y sus argumentos se podrá ver que esa limitación proviene del miedo de las clases altas hacia las clases bajas, a que éstas irrumpieran en el poder y empezaran a tutearse con la élite social. A continuación, se expondrá una serie de medidas e instrumentos que han ayudado a impedir el acceso político a las clases trabajadoras.

En la segunda parte, *Origen de la crisis del sistema representativo y secuestro de la voluntad general*, se analizará el artificio simbólico creado que compone el sistema representativo y su contradicción interna. Así como la relación entre la clase hegemónica a partir de las revoluciones contemporáneas y la apropiación de las instituciones y valores democráticos, lo cual contraerá una segunda paradoja: denominada paradoja externa. Por último, en la tercera parte, *Atado y bien atado*, se rastrearán las razones de la pérdida de soberanía popular y nacional en España, analizando los instrumentos para efectuar tal fin.

2. DEMOCRACIA

2.1 Titularidad de la democracia

Partimos de base con una premisa comúnmente aceptada por todos, la cual entiende a la democracia como el sistema donde el pueblo, la ciudadanía, es el titular legítimo del poder político. Ahora bien, la pregunta que cabría hacerse sería ¿a qué actores se les considera pueblo?, ¿quiénes forman parte del *dêmos*?, ¿quiénes son, por tanto, los titulares de la democracia? En otras palabras, tal y como los expresaría Sartori (1998: 127), el problema de la democracia «siempre ha sido de qué modo y qué cantidad de poder transferir desde la base al vértice del sistema potestativo.» Es decir, en qué modo y en qué grado el pueblo soberano puede ejercer el poder, del cual es el titular. Sin lugar a duda todo ello tiene mucho que ver con los criterios que se establecen para determinar a quién se le considera ciudadano (ciudadana) de pleno derecho y cómo, a su vez, uno (una) puede tener mayor o menor capacidad de decisión en el gobierno del lugar donde habita (Pérez, 2008).

Con todo, el verdadero interrogante no es tanto el problema que suscita *supra* en torno a la democracia, sino el por qué de él. Porqué se trata de limitar la participación política. A lo largo de la historia siempre que ha habido algún repunte de participación política, de asalto de las clases bajas al poder político, la oligarquía ha estado ahí para poner algún tipo de freno al respecto (Domènech, 2004). El miedo de las clases altas a que los pobres, los desposeídos, la canalla, aquellos que trabajan con las manos, se elevara a la plena condición de ciudadanos e irrumpieran en el poder es tan viejo como la propia filosofía política.

El mundo antiguo conoció el odio extremo de clase por el sencillo motivo de que las clases bajas libres llegaron a estar muy cerca a participar o incluso a entrar en plena posesión del poder político. Así la República de Atenas, a partir de 461 antes de nuestra era, tras la Revolución de Ephialtes; la República de Roma después de la gran reforma constitucional de signo plebeyo de 287 a.C. (Fernández, 2005). Sírvese de ejemplo la siguiente sentencia de Aristóteles: «seré el enemigo del pueblo bajo (*dêmokakonous*), y decidiré contra él todo el mal que pueda» (1310A).

Es interesante la interpretación de Antoni Domènech (2004; 1989) de las obras aristotélicas *Ética a Nicómaco*, *La Política* y la *Poética*, donde muestra la correlación

que establece el autor griego en la división entre riqueza y pobreza, la aristocracia y el *dêmos* (léase como pobres libres que realizan trabajos serviles con sus manos) y como subdivisión subordinada a las anteriores categorías entre virtud (*areté*) y vicio (*mochtería*). Argumentando, de este modo, quienes deberían gobernar en la ciudad para que abunden los bienes públicos. Véase en un fragmento de texto de *La Política* a modo de prueba.

“...resulta evidente que en la ciudad óptimamente gobernada y que posee hombres justos absolutamente –no relativamente al tipo de régimen–, los ciudadanos no deben llevar una vida de trabajador manual ni de mercader (porque tal género de vida carece de nobleza y es contrario a la virtud), ni tampoco han de ser campesinos los que han de ser ciudadanos (porque tanto para que origine la virtud, como para las actividades políticas, es indispensable el ocio) (Aristóteles, 1328B)

La posibilidad de que la gente baja pueda llegar a gobernar, como ya se ha comentado, tiene sus vaivenes a lo largo de la historia. Así pues, hasta la llegada de las ciudades-estado durante la baja Edad Media e incipiente modernidad no se volverá a ver un repunte al respecto (Ascheri, 2003-2006). A partir del siglo XV el triunfo del estado-nación absolutista extenderá un tupido velo tanto en las aspiraciones de los *popolari* a una participación política como de la resistencia de las clases dominantes a que el poder político sea extensivo e igualitario. Pues los pobres no volvieron a irrumpir en el panorama político hasta la crisis de las monarquías absolutistas y, con ella, las revoluciones modernas: la Guerra de los ochenta años en Holanda (S.XVI), las dos revoluciones inglesas del siglo XVII (a mediados y finales del siglo, *La Gloriosa*), la norteamericana y francesa del XVIII, las revoluciones independentistas en la América española del XIX y las revoluciones democráticas de 1820, 1830 y 1848. Sin olvidar la primera constitución española, *La Pepa*, la cual fue la primera constitución liberal con participación popular (Sebastià y Piqueras, 1987; 1991).

Si se recurre a coetáneos de la época de las revoluciones modernas y a posteriori de las mismas con la consolidación de las monarquías constitucionalistas (Romeo, 1993), las citas que se podrían recopilar, donde los protagonistas representasen a una clase acomodada, serían múltiples y a voluntad. Pero lo realmente importante de ellas, en gran parte, es lo que las unen entre sí y con el pretérito, donde también se dieron enfrentamientos por una apertura en la participación política: la defensa de un poder político por los propietarios y el repudio hacia los desposeídos.

Tenemos que ser gobernados por los mejores; los mejores son los más instruidos y los más interesados en el mantenimiento de las leyes. Ahora bien; descontadas algunas excepciones, no hallaréis hombres así sino entre quienes gozan de alguna propiedad, los cuales adhieren al país en la que ésta se halla, a las leyes que la protegen, a la tranquilidad que la conserva, y deben a esa propiedad y a la holgura que ella proporciona la educación que los ha hecho capaces de discutir, con sagacidad y precisión, sobre las ventajas y los inconvenientes de las leyes que determinan la suerte de la patria... Un país gobernado por los propietarios está en el orden social; no gobernando por los no propietarios [la democracia] es el Estado de naturaleza (Domènech, 2004: 92)¹

Obsérvese la analogía que se hace del hecho de disponer de propiedad con la consecución de un país estable, con un gobierno que proporcione bienes públicos al conjunto. Y en su contrario, un país que ha caído en el «Estado de naturaleza», es decir, en el caos más absoluto, es el que es dirigido «por los no propietarios [democracia]». Esta defensa del sufragio censitario, expuesta por el diputado Boissy d'Anglas, en 1795, guarda gran complicitad con la correlación de categorías que establece Aristóteles entre aristocracia (ricos, propietarios), virtud y buen gobierno, por un lado, y, por otro lado, con los trabajadores que ganan sus vidas con las manos (pobres, desposeídos), *mochteria* (vicio) y la amenaza para la concordia de la comunidad política.

Virtud y buen gobierno son indisolubles en la tradición republicana. Pues aquella persona poseedora de virtud *política* o *cívica* antepone el bien público al bien privado, busca las mejores leyes para la república en pro del interés general (De Francisco, A y Daniel Raventós, 2005). No obstante, Boissy d'Anglas asocia la riqueza y la propiedad como fuente de la virtud, basta fijarse en la última parte de su defensa: «Un país gobernado por los propietarios está en el orden social», y lo mismo ocurre en el caso del filósofo griego:

Además, los ricos parecen tener aquellos cuya carencia hace que los delincuentes delincan: por eso los llamamos selectos y distinguidos; y lo mismo que la aristocracia concede la supremacía a los mejores ciudadanos, también se dice que las oligarquías están constituidas principalmente por los selectos (Aristóteles, 1293B).

Y como categoría contraria, el pueblo pobre carente de virtud: «[...] y entre los trabajos de que se ocupa un pueblo de artesanos, de mercaderes y de asalariados no hay ninguno virtuoso» (Aristóteles, 1319A).

Las similitudes entre diferentes épocas históricas, donde existe una pretensión de las clases trabajadoras a un reconocimiento de su existencia política, no acaban en la

¹ El diputado de los Estados generales francés Boissy d'Anglas en 1795, tras el golpe de Estado antijacobino. Defendiendo el sufragio censitario.

defensa de un gobierno de propietarios para la consecución de los bienes públicos, más bien existe otro denominador común: el desprecio de las clases altas hacia las clases bajas.

En este sentido, es muy elocuente Antoni Domènech (2004), cuando muestra la significativa coincidencia en la descripción de los manifestantes de la Comuna de París de 1871 por parte de Alphonse Daudet con la dada por Agustín Foxá al detallar el aspecto de los manifestantes del Frente Popular tras su victoria en las elecciones de 1936. Véase respectivamente: «Cabezas piojos, cuellos grasientos, pelo embetunado, los chiflados, los domadores de caracoles, los sabiondos de pueblo, todos los descontentos, los desclasados, los tristes, los retrasados, los incapaces.» (Domènech, 2004: 28). Con más de medio siglo de diferencia las semejanzas son, cuanto menos, sorprendentes:

Pasaban las masas ya revueltas; mujerzuelas feas, jorobadas, con lazos rojos en las greñas, niños anémicos y sucios, gitanos, cojos, negros de los cabarets, rizados estudiantes mal alimentados, obreros de mirada estúpida, poceros, maestritos amargados y biliosos. Toda la hez de los fracasos, los torpes, los enfermos, los feos; el mundo inferior y terrible, removido por aquellas banderas siniestras (Domènech, 2004: 23).

Es posible que el miedo y desprecio a quienes se ganan la vida con las manos, por parte de la oligarquía dominante, no haya muerto nunca y tenga algún que otro “lapsus” en el presente: recuérdese el grito por parte de la diputada Andrea Fabra, en diciembre de 2012, en el mismo Congreso de los Diputados, tras dar a conocer el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, una nueva batería de medidas que suponían graves recortes a los parados «Muy bien, muy bien. ¡Qué se jodan!». Por poner otro ejemplo, el comentario del actor asturiano Arturo Fernández, en el programa *El gato al Agua* de *Intereconomía*, haciendo referencia al aspecto de los manifestantes, los cuales estaban en contra de los recortes sociales que estaba implantando el gobierno en 2012, «no he visto gente más fea que en las manifestaciones»; o, más recientemente, el comentario que dirigió Martínez Castro, secretaria de Estado de Comunicación, hacia los pensionistas que pitaban y abucheaban al presidente del gobierno en su llegada al Ayuntamiento de Alicante, el 7 de mayo de 2018, «¡Qué ganas de hacerles un corte de mangas de cojones!, y decirles: Pues, ¡os jodéis!».

Todas estas fuentes no solo evidencian el temor, el rechazo, la inquina, el terror, el desprecio –llámese como quiera- de las clases dominantes hacia las clases más pobres, sino, también se podría decir, que el marcador diferenciador dentro de la sociedad ha sido siempre la propiedad y su acceso desigual a la misma. Tanto los desposeídos como

aquellas personas que poseen propiedad van a representar intereses contrapuestos. Los medios y los argumentos que se van a poner sobre el tablero de juego, para impedir que todo el conjunto de la sociedad pueda acceder de forma igualitaria al poder han sido muy distintos a lo largo de la historia. Incluso se han ido haciendo más sofisticados y difíciles de detectar con el paso del tiempo. Salvaguardar la propiedad, y por ende sus intereses, ha sido una prioridad para la oligarquía, y eso pasaba por negar de raíz toda pretensión de existencia política de quienes viven por sus manos.

2.2 ¿Cómo impedir el acceso al poder político de las clases trabajadoras?

La columna vertebral en la tradición republicana, tanto antigua como moderna, lo compone el concepto de libertad. La *libertas* republicana se define como ausencia de dominación, como independencia capaz de juzgar y decidir por sí sola sin interferencia arbitraria de un tercero. Significa autogobernarse, esto es, decidir autónomamente, emanciparse (Bertomeu, 2005; De Francisco y Raventós, 2005; Pettit, 1997). Por tanto, la contraposición republicana a la libertad es la sumisión y la dominación. No es libre aquel(la) que «no puede decidir por sí mismo cómo quiere vivir; no lo es porque es víctima de un poder que lo domina, [...] pudiendo interferir arbitrariamente en sus decisiones» (De Francisco y Raventós, 2005: 259).

Ahora bien, si la libertad es la piedra angular del republicanismo, la virtud viene a complementarla. Una persona es virtuosa cuando su voluntad no es tornadiza, cuando es capaz de deliberar – con prudencia- y resolver racionalmente el fin esencial de la vida: la felicidad. Pues ésta (la felicidad) es el único bien que es querido por sí mismo, que es fin y no instrumental (Aristóteles, 2014).

En el plano político, la consecución de la felicidad será también el fin último de la política. En otras palabras, su fin será hacer posible una vida buena, una vida plena para la ciudadanía. Para ello las decisiones que se deben tomar en pro de conseguir tal fin, deben ser siempre escogidas anteponiendo el interés general, el bien público, a sus intereses privados (Peña, 2005). Por el contrario, si se antepusiese el beneficio propio de cada uno, el egoísmo como eje rector de la vida y de la república, la república caería en un gobierno corrupto, se dejarían de producir bienes públicos y sería gobernada por malas leyes (De Francisco y Raventós, 2005; Pettit, 1997).

Para que la libertad pueda ser aplicada requiere que los individuos tengan un determinado nivel de suficiencia material. Eso es así, sencillamente, porque para que

una persona pueda vivir (¡qué menos que dignamente!) necesita de una serie de bienes y recursos. La base segura para que se dé una subsistencia material es la propiedad. Gran parte de la tradición republicana ha sido fuertemente propietarista² (De Francisco y Raventós, 2005; Domènech, 2004). En este sentido, la propiedad viene a garantizar la independencia individual, el libre raciocinio del individuo sin constricciones ni condicionantes, la persona es dueña de sí misma (*sui iuris*). Lo que permite, a su vez, la libertad política y el ejercicio de la virtud (Bertomeu, 2005; De Francisco y Raventós, 2005; Pettit, 1997).

Sin recursos ni bienes, sin propiedad, la persona estará obligada a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir, estableciendo una relación de subordinación y dependencia respecto a su patrón. Sus juicios podrán estar condicionados a la voluntad de quien le sustenta (*alieni iuris*), limitando su independencia política. Su dependencia material lo llevará a tomar decisiones individuales para beneficiarse, alejándose del bien público y acercándose, evidentemente, al bien privado. Cayendo en el abismo de la corrupción, deviniendo en un ser invirtuoso.

Con esta argumentación los primeros constitucionalistas se dispusieron, primero, a discutir y, luego, a implantar el sufragio censitario y, para ello, la división efectiva entre ciudadanos activos (ricos, propietarios con derecho a voto, que podía permitirse pagar su censo) y ciudadanos pasivos (pobres, desposeídos, con tan sólo derecho civiles). Esta medida suponía un claro estrechamiento para una ciudadanía universal, un muro de contención para evitar la plena inclusión política de las clases bajas (Domènech, 2004). Con la separación entre derechos pasivos y derechos activos, propios de la distinción entre ciudadanía pasiva y activa, lo que se estaba poniendo en tela de juicio era la libertad de una parte de la ciudadanía. De esta forma, «los derechos políticos o “derechos activos” se los reservaba a sí misma la nueva clase dominante, pues el ciudadano pasivo está sometido a la necesidad del trabajo y por tanto a la *servitus*, está excluido por definición de la categoría de “hombres libres”» (Piqueras, 2014: 55, nota 20).

² La diferencia entre el republicanismo elitista y el republicanismo democrático es que, el segundo insiste en la propiedad para ser libres, pero en la propiedad común (antes del capitalismo), o socializada, a partir del capitalismo y contra él. Y el primero sólo contempla la propiedad como propiedad privada (Marx, 1989).

La ciudadanía de pleno derecho quedó condicionada a la propiedad, pues de ésta se entendía que las personas no eran dependientes de la voluntad de un tercero – cuando menos en relación con su supervivencia- y que en consecuencia eran capaces de deliberar por sí solas (Bertomeu, 2005; De Francisco y Raventós, 2005; Pettit, 1997). Luego, «quienes carecían de independencia no tenían derecho al voto, porque la dependencia de una voluntad ajena es incompatible con la ciudadanía activa y con la capacidad de participación política» (Bertomeu, 2005: 135). La participación política se entiende junto con la capacidad de deliberar, como una exigencia de la libertad republicana. «Porque deliberar no es negociar intereses preestablecidos; deliberar es participar en un proceso donde se aportan razones sobre problemas de interés general, no particular» (De Francisco y Raventós, 2005: 265).

Indudablemente la cuestión de la propiedad adquiere un cariz que es de suma importancia. Todo aquel que no posea propiedad debe ser alejado de la esfera pública. El dependiente –ya sea trabajador asalariado, inmigrante, mujer, etc.,-, está en una situación de vulnerabilidad, por lo que es fácilmente susceptible de la dominación del poderoso (Bertomeu, 2005; De Francisco y Raventós, 2005; Pettit, 1997). No es muy complicado de deducir, al fin y al cabo tener poder es eso: tener la capacidad de hacer lo que uno quiera y la facultad de hacer que los demás se comporten según tus intereses. La independencia –ya sea económica o social-, como bien sabe la tradición republicana, es la base de la libertad. De alguna manera los republicanos demócratas han tratado de contrarrestar esta situación de dependencia material y los argumentos tendenciosos que relacionaban la propiedad con la virtud (Aguar, 2005; Bertomeu, 2005; Domènech, 2004) mediante la remuneración a cargos (como fue en el caso de la república ateniense después de la Reforma de Ephialtes, en la república francesa durante el período robesperriano o en la Comuna de París³), con reformas sociales estructurales para elevar

³Tanto en el período robesperriano como en la Comuna de París la remuneración a cargos presentaban una serie de limitaciones. Véase este fragmento en el célebre discurso de Robespierre el 10 de mayo de 1793 en la Convención: «Que la patria indemnice al hombre que vive de su trabajo, cuando asiste a asambleas públicas. Que dé un salario, por la misma razón, de forma proporcionada a todos los funcionarios públicos.» Y ahora, fíjese en cómo trata de garantizar, también, la comprensión y asistencia de toda la ciudadanía: «Que las reglas de las elecciones, que las formas de las deliberaciones sean tan simples y resumidas como sea posible. Que los días de las asambleas sean fijados en las épocas más cómodas para la parte laboriosa de la nación.» (Robespierre, 2005: 217). Por la parte que le toca al breve pero intenso período democrático de la Comuna de París (1871), se estableció que los miembros del gobierno no podrían percibir un sueldo mayor que el de un obrero, prohibiéndoles, a su vez, «la acumulación y aprovechamiento propio de sus cargos.». Además, los representantes en el desarrollo de su labor como fideicomisarios de la ciudadanía tenían dos categorías centrales, las de *accountability* y *responsiveness*. Es decir, responder a la mayoría del *demôs* para la que habían sido elegidos y dar cuentas

a toda la sociedad civil a la condición de *sui iuris* (Domènech, 2004) o mediante, más reciente, la propuesta de la Renta Básica para la ciudadanía⁴ (De Francisco y Raventós, 2005; Bertomeu, Domènech y Raventós, 2018). Pues el republicanismo demócrata e inclusivo era (es) consciente que en ninguna comunidad pueden aflorar los bienes públicos y conseguir su fin último, la felicidad, si la mayor parte de sus miembros viven en condiciones de pobreza, explotación, subordinación y miseria (Aguiar, 2005; Domènech, 2018) El republicanismo democrático abanderó la universalización de la libertad republicana en busca de la emancipación de todos los seres humanos y el firme convencimiento que todas las personas deben poder acceder de pleno derecho a la vida civil como «libres e iguales (recíprocamente libres)» (Domènech, 2004; Mundó, 2018).

El sufragio censitario ha sido una de las medidas utilizadas para impedir el acceso político a las clases bajas trabajadoras. Una medida que no fue abolida hasta que tras años de lucha de los partidos y movimientos obreros socialistas (en el amplio sentido de la palabra, donde se incluye a laboristas o social-demócratas, anarquistas y comunistas) no se produjo un ensanche en el círculo de los derechos políticos y sociales. Otros instrumentos utilizados para evitar la incursión política de «la canalla» vendrán de la mano de la doctrina de división de poderes y del equilibrio de poderes (*checks and balance*, frenos y contrapesos) (De Francisco, 2005; De Francisco y Raventós, 2005; Domènech, 2004; Pettit, 2005).

Ambas doctrinas cumplen una función básica: la dispersión o la no concentración del poder. «La lógica republicana detrás de la dispersión del poder es [...] incrementar la no manipulabilidad de la ley y evitar que el gobierno ejerza influencia arbitraria sobre otros» (Pettit, P, 2005: 54). Tanto una doctrina como la otra tratan de evitar la acumulación del poder, de la tiranía. No obstante, la implementación de esas medidas

y explicaciones en el ejercicio del cargo. Con la clara posibilidad de revocación si así lo estima la ciudadanía. (De Francisco, 2005; Malatesta, 2015, <https://www.laizquierdadiario.com/La-Comuna-de-Paris-la-primer-revolucion-del-proletariado>).

⁴ Ante la amenaza del “fin del trabajo” eminente, del que hace ya décadas se viene anunciando, la exclusión y la precarización laboral a la que buena parte de la población mundial está sometida, la propuesta de una Renta Básica para la ciudadanía (o Renta Básica Universal, RBU) se presenta como un paliativo al inhóspito horizonte descrito. No obstante, en las condiciones capitalistas de producción y distribución, la RBU lo único que garantiza es una sociedad asistida por el poder, y por tanto más sumisa y aceptadora de las condiciones intrínsecas de desigualdad de poder y explotación inherentes a este sistema social. Quienes defienden hoy la renta básica universal (RBU), incluso la incondicional, no ven salida al capitalismo, y por tanto se pliegan a aceptar la explotación del ser humano por el ser humano y la dependencia del salariado respecto de quienes detentan los medios de producción. A lo único que aspiran es a que esa dependencia esté contrarrestada en alguna medida por la RBU (Mercatante, 2018). En definitiva: se trata de contrarrestar la dependencia material a la que se argüía en el texto pero sin eliminarla.

no siempre son tan inocentes como parecen, ya que con frecuencia han adquirido un tinte con un marcado sesgo elitista y contramayoritario (De Francisco, A, 2005; De Francisco, A y Daniel Raventós, 2005; Domènech, A, 2004). A continuación, en primer lugar, se hará una breve incursión del precedente del bicameralismo, uno de los instrumentos dentro de la doctrina *checks and balance*, y por último se comentará algunas repercusiones de ambas doctrinas que han facilitado la exclusión de democrática del conjunto de la población.

2.2.1 *El gobierno mixto, Aristóteles.*

A pesar que hasta la llegada del siglo XVIII no se produjo la clasificación de los poderes (judicial, ejecutivo y legislativo) como tal y con ella la propuesta de su división por parte del republicanismo moderno (tema que se abordará a continuación), la dispersión de poderes fue un tema que ha sido tratado con anterioridad (Pettit, 2005). A uno de los padres del republicanismo, Aristóteles, se le debe (entre otras cosas) el inicio de uno de los instrumentos utilizados dentro de la doctrina del equilibrio de poderes, el bicameralismo moderno. Mediante su propuesta de un gobierno mixto se inició el camino hacia la constitución de dos cámaras (Domènech, 2004).

Cabe recordar, primero antes que nada, que Atenas estuvo gobernada durante más de cien años, casi de manera interrumpida, por el partido democrático de los pobres (el partido de Pericles, de Sófocles, de Ephialtes, etc.). Precisamente de la mano de este último, de Ephialtes, se produjo una gran reforma constitucional. La cual significó, principalmente, la participación masiva del *dêmos* pobre en la vida política. Un hecho que fue posible debido a la remuneración mediante fondos públicos a quienes participaban en las asambleas deliberativas, en los tribunales populares y a los cargos públicos del gobierno (Fernández, 2005).

A pesar de las medidas aplicadas a raíz de la reforma de Ephialtes, que atajaban el problema de dependencia de los pobres libres, para Aristóteles éstos (los pobres libres) seguían careciendo de virtud y, por tanto, no eran los más idóneos para gobernar la república. La asociación riqueza y virtud, y pobreza y vicio seguían en la cabeza del filósofo griego aún después de todo, aun después que las pruebas empíricas de su época lo hubieran podido llevar a concluir que la virtud no pertenece a una sola clase, los ricos, sino que es universal (Domènech, 2004)

Pero Aristóteles es ante todo un perfecto *realpolitiker*. Aunque la democracia, el gobierno de los pobres libres, no le inspirara ningún tipo de confianza y simpatía, reconoce que una exclusión total del *dêmos* en el juego político solo conduciría hacia la inestabilidad política. Lo que le lleva a proponer un régimen mixto, su *politeía*, entre la aristocracia y el *dêmos*, la oligarquía y la democracia (argumentándolo como el resultado de una elección según la fórmula como *mal menor* o como solución pragmática dado el carácter irrealizable de otras fórmulas que, en caso de poder llevarse a cabo, serían preferidas) (Bobbio, 2001).

En esta propuesta de un régimen de gobierno mixto, Aristóteles reconoce que la participación en el ágora no debe ser restrictiva y sólo dejar su inclusión hacia quienes poseen altos ingresos. Sino que debe ser abierta, lo que le daba ese tinte democrático a la *politeía*. La ocupación de las magistraturas sólo por las clases altas era la vertiente aristocrática de la propuesta aristotélica. ¿Cómo se podría asegurar que el ejercicio de las magistraturas estuviera dominado por la oligarquía? Pues de una forma bien sencilla, penalizando a las clases altas cuando no participasen del gobierno de la república y eliminando la remuneración a cargos a las clases bajas (Bobbio, 2001; Domènech, 2004). La eliminación de sueldo conllevará a que el pueblo pobre se vaya apartando de los asuntos públicos paulatinamente y confinándose solo a la pura *idiocia* (a la vida privada). Retirando el salario público no se negaba que el gobierno estuviera abierto a la participación, pero volvía a establecer las estructuras de interdependencia social que se había tratado de romper mediante la reforma de Ephialtes, y ponía punto y final al progresivo desentendimiento en los asuntos públicos por parte de los ricos y distinguidos (Domènech, 2004).

2.2.2 Algunas barreras al poder político de las clases bajas.

La tradición republicana tiene, al menos, dos principios constitucionalistas, a saber: a) el imperio de la ley; y b) la no concentración del poder (De Francisco, 2005; Pettit, 2005; De Francisco, 2001). El primero de ellos se asienta en la premisa de que toda acción de gobierno debe tener una base legal y, por lo tanto, no particularista, para que la autoridad del gobierno esté *legibus restricta* y que nadie esté por encima de la ley. La ley, por lo tanto, debe ser universalmente aplicable, debe recaer en beneficio de toda la comunidad y no sólo en un grupo determinado de la población. La ley es garantía de libertad republicana, pues ella asegura que cualquier individuo o grupo no pueda ejercer

un poder arbitrario y dominante sobre el resto. En definitiva, protege a la libertad de su antítesis: la tiranía (Pettit, 2005: 49-52).

El problema en el primer principio está en que la redacción y el resultado de leyes no tienen porqué ser en sí mismas imparciales. La teoría puede ser una cosa y, en efecto, la práctica es otra. Es decir, «el que nadie esté por encima de la ley, no quiere decir que el sistema legal no tenga sesgos oligárquicos, ni garantiza que la ley y su imperio contemplen por igual todos los ciudadanos» (De Francisco, 2005: 77; Gargarella, 2003). Un ejemplo de ello sería las diferentes leyes que restringían el derecho de asociación obrera (que se fueron aplicando en diferentes años dependiendo del contexto histórico de cada uno de los países, pero que por norma general se mantuvieron en el siglo XIX y principios del XX), y que restringían cualquier actividad de estas organizaciones limitándoles su libertad (Domènech, 2004). O más recientemente la aplicación de la Ley Mordaza en España, que parece rememorar tiempos pasados (Rodríguez-Aguilera, 2015).

El derecho, así como la religión o la moral, no se pueden comprender como hechos aislados, como conceptos con desarrollo e historia propia. Pues, más bien, nacen de la historia de los seres humanos, la cual se halla condicionada por las relaciones materiales entre los humanos. La raíz explicativa del derecho, concretando sobre el asunto que aquí importa, se encuentra en las relaciones socioeconómicas. Es decir, no se parte de acontecimientos aislados, sino de la relación entre la organización política, de producción y social. Siendo conscientes que en conjunto, tales organizaciones forman un todo debido a sus inter-relaciones recíprocas (Escamilla, 2004). Véase en Marx:

... toda forma de producción engendra sus propias instituciones jurídicas, su propia forma de gobierno, etc. La grosería y la incomprensión consisten precisamente en no relacionar sino fortuitamente fenómenos que constituyen un todo orgánico, en ligarlos a través de un nexo meramente reflexivo (1989: 38).

La forma de comprender el derecho es partir de las relaciones socioeconómicas. ¿Por qué? Esto es así, tanto que el derecho es producto del poder. A partir del desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones materiales, es donde se entretajan los intereses de las diferentes clases sociales. La clase social dominante será la poseedora del poder y la creadora del poder del Estado. El cual creará al derecho, según imagen y semejanza de la clase dominante, para legitimarse en el ejercicio del poder político (Escamilla, 2004). Lo que quiere decir que según las distintas fases en las relaciones de

producción e intercambio, se podrá encontrar diferentes formas de derecho. Un ejemplo se podría encontrar en la estrecha vinculación existente entre la evolución del derecho privado y la evolución de la propiedad privada (Escamilla, 2004; Marx, 1989). Obsérvese, si no, en el momento de la redacción de la primera Declaración de Derechos Humanos y Ciudadanos de 1789 cómo se establecía, en su artículo 2, la propiedad como derecho natural. Lo que la elevaba, a la propiedad, a carácter sagrado, intocable, inviolable (Domènech, 2004).

En cuanto al segundo principio constitucionalista, o *desiderátum* constitucional, la no concentración del poder, tiene la misma finalidad que el primer principio constitucionalista, impedir que el poder político se convierta en tiránico. Evitar la concentración o el abuso del poder es básico para el pensamiento republicano, ya que en su dispersión está el medio para escapar de un poder desmedido, arbitrario y corrupto. Este principio se bifurca en dos doctrinas: la división de poderes y el equilibrio de poderes (*checks and balance*, frenos y contrapesos) (De Francisco, 2005; De Francisco y Raventós, 2005; Domènech, 2004).

La división de poderes se diferencia entre la denominada división sincrónica –que correspondería a la división típica entre ejecutivo, legislativo y judicial, establecida por Montesquieu- y la diacrónica, la cual tiene dos líneas principales: la rotación en los mandatos y la brevedad en los mismos. Esta última tipología de división de poderes es la que ha defendido normalmente el ala democrática del republicanismo, desde la democracia ateniense pasando por Jefferson, Robespierre o Marx. El pensamiento democrático-republicano ha considerado a la división diacrónica como forma valiosa de democratizar el Parlamento, ya que mediante ella se aseguraba que los representantes del pueblo no se perpetuaran bajo la seducción del poder y todo lo que tras él conlleva. (De Francisco, 2005: 78-79). En cuanto a la primera, la más popular, las razones parecen obvias, Philip Pettit la justifica así:

Si sólo se permite a los legisladores legislar de forma consistente con ciertas leyes o principios existentes, entonces es importante que aquellos que juzgan si la legislación se ajusta a esas constricciones no sean los propios legisladores. Y, a su vez, si se exige que aquellos que ejecutan la ley deban ajustarse a las leyes existentes en su forma de ejecución, es importante que no sean ellos mismos sus propios jueces, es decir, que el poder judicial relevante descansa en otras manos. Los poderes de legislación, ejecución y atribución deben ser distribuidos entre distintas partes y organismos (2005: 53).

Por su parte, la doctrina de frenos y contrapesos (equilibrio de poder) lo que propone es frenar el poder para que éste no sea inmensurable y peligroso, para, nuevamente, cumplir el principio antitiránico del que se ha hecho mención (De Francisco, 2005). Ahora bien, y he aquí el punto que interesa, tal y como advierten, A. Domènech (2004) y Andrés De Francisco (2005), es importante darse cuenta cómo se activan los mecanismos que han de hacer de frenos y contrapesos a un poder tiránico.

En la intencionalidad que puedan esconder detrás los mecanismos podemos encontrarnos como resultado unos instrumentos que sirvan para favorecer una determinada clase social u otra. Un claro ejemplo de ellos son los mecanismos que establecieron los *founders*, los padres del constitucionalismo, para evitar la tiranía y la concentración de poder mediante la división de poderes. Algunos de los más reseñables son el bicameralismo, un sistema judicial con veto al legislativo y un ejecutivo fuerte con veto también al legislativo. Es más que evidente el sesgo contramayoritario en estas medidas, donde se busca no solo poner freno al pueblo sino también proteger «a las amenazadas minorías de la riqueza y la cuna» (De Francisco, 2005: 81). De nuevo, se puede ver el miedo que se tenía a un posible poder del pueblo llano en el plano político.

Véase con detenimiento. Se separaba el poder legislativo en dos cámaras: una cámara baja que representara al pueblo –elegida, eso sí, bajo períodos cortos- y otra cámara alta, el Senado, que representara a las clases altas, elegida para períodos largos. Y además, las decisiones del legislativo quedaban limitadas bajo el veto del poder judicial por un lado, y/o del ejecutivo por otro. Se hace evidente, entonces, cómo las barreras que se le imponían a la voluntad popular resultaban prácticamente insalvables.

De los frenos y contrapesos establecidos por los primeros constitucionalistas se puede extraer dos líneas principales, las cuales aún perduran: el bicameralismo y un poder judicial ilimitado. Del bicameralismo baste decir que su nacimiento está inspirado históricamente bajo dos funciones: «bien permitir la representación separada y privilegiada de la nobleza hereditaria, bien defender los intereses de las minorías hacendadas, bien ambas» (De Francisco, 2005: 81). El sistema bicameral se instauró precisamente para garantizar que la aristocracia siempre tuviese asiento en el poder institucional. Es por ello que el redactor del anteproyecto de la Constitución española de la II República, el socialista Jiménez de Ásua, huyó «de la concepción

contramayoritaria –contrademocrática- tradicional de la división de poderes» (Domènech, 2004: 429), así como del sistema bicameral:

Hay, evidentemente, una decadencia del sistema bicameral y nosotros hemos observado que cuando los pueblos realizaron grandes llamamientos populares, no hicieron más que una sola Cámara. Así ocurrió, por ejemplo, en Francia en 1791 y en 1848; así ocurrió en España en las Cortes de Cádiz contra el parecer de Iguanzo, que bien combatió Toreno. Establecemos, pues, por ser altamente democrática nuestra Constitución, una sola Cámara. El sistema bicameral es sobremano nocivo (Discurso de Luis Jiménez Ásua, pronunciado el 17 de agosto de 1931 ante las Cortes Constituyentes de la Segunda República española; en Domènech, 2004: 430).

Además, el bicameralismo no es imprescindible para equilibrar el poder en el legislativo, un sistema unicameral también posee sus propios frenos y contrapesos (De Francisco, A, 2005). El debate entre unicameralismo y bicameralismo hoy por hoy sigue abierto.

Por su parte, la estructura judicial, heredada de los *founders* (Domènech, A, 2004), concede a los jueces un poder prácticamente incuestionable, muy especialmente a los pertenecientes a la Corte Suprema, en numerosos países tanto de Europa como de América. Bajo un extenso mandato (cuando *quasi* inamovible) se les ha otorgado la facultad de intervenir en los conflictos de la *res publica* interpretando la Carta Magna, sin ningún tipo de guión base para poder interpretar. Como consecuencia los jueces tienen manga ancha para tomar sus propias decisiones. Y, a su vez, al carecer de un marco normativo sobre *cómo interpretar*, los ciudadanos carecen de herramientas con las que reprochar determinadas sentencias y poder reprobar a los magistrados (Gargarella, 2003). La división de poderes se instauró tras el Termidor francés, para asegurar que jamás “el pueblo” podría tomar decisiones “incorrectas”, es decir “ilegales”. Sabiendo que la legalidad era y es la de los poderosos. Por eso el especial cuidado de la burguesía, en adelante, de que a la función judicial no llegaran nada más que los hijos de la clase dominante (durante mucho tiempo sólo los varones, claro) (Domènech, 2004).

Con todo ello lo que se pretende es sacar a la luz la dudosa imparcialidad del sistema judicial, hecho del que el presidente estadounidense Jefferson ya supo prever en su tiempo (Domènech, 2004). Su análisis sería: si las constituciones son básicamente proteccionistas a los intereses de las clases altas, y/o fuertemente defensivas frente a posibles asaltos al poder de las clases bajas, y al sistema judicial se le dota de potestad para intervenir e interpretar las leyes, con un claro papel de valedor de la estabilidad

constitucional, entonces, la única solución pasa por devolver al *dêmos* su soberanía, facilitándole la revisión de sus leyes fundamentales (la Constitución) (De Francisco, 2005).

Parece obvio que un poder sin frenos ni contrapesos crecerá de forma desmesurada y temible, dirigiendo al gobierno hacia la tiranía y la corrupción. Pero, igualmente de peligroso es un diseño constitucional e institucional de la división y equilibrio de poderes con sesgos abiertamente contramayoritarios y elitistas, que acaban por favorecer a un determinado grupo reducido, obviando el bien común y la voluntad general.

3. ORIGEN DE LA CRISIS DEL SISTEMA REPRESENTATIVO Y SECUESTRO DE LA VOLUNTAD GENERAL

La Crisis de la Representación es un tema de debate y discusión recurrente y actual. Recurrente porque es una idea tan antigua como la propia formulación clásica de la teoría liberal de la representación. Y actual, porque en torno a la práctica política en el seno de la democracia representativa se manifiestan vicios y disfunciones del modelo (la politización de las instituciones por parte de los partidos políticos, la pérdida de centralidad en el parlamento, etc.), lo que en consecuencia hace que sigamos hablando de ella (Ramírez, 2014). Hablar del origen de la Crisis de la Representación supone recordar la historia del secuestro de la voluntad general. Conversar en torno a la Crisis de la Representación conlleva, también, recordar cómo se llevó a cabo la construcción del mismo sistema representativo. Entendiendo la propia construcción del sistema como si fuera la estructura de una mesa con sus cuatro patas: nación, Parlamento, mandato representativo y opinión pública.

3.1 El origen de la Crisis de la Representación

El criterio racionalizador y autorregulador llevada a cabo por los fisiócratas en el siglo XVIII de la teoría ilustrada, resumida en el lema clásico de *laissez faire*, rebasará la frontera de lo económico e impregnará la esfera social y política. Si en el plano económico existe un orden natural, una razón inmanente que sola se autorregula – encarnada en el ejemplo de Adam Smith de *la mano invisible* – (Aguilar, 2005) en el plano político y social también se encontrará ese orden natural. Donde existirá el libre intercambio de opiniones y que llevarán a la creación de verdades compartidas por la sociedad (De Vega, 1996).

La consolidación de la burguesía como clase social hegemónica llevará consigo la separación entre Estado y sociedad (Sebastià y Piqueras, 1987). Al Estado se le atribuirá la causa de todos los males del individuo, fruto de la irracionalidad absolutista, en una pura analogía con la aristocracia. Por otro lado, la sociedad será entendida como el ámbito del bien, de donde se desarrollará la racionalidad democrática y donde el individuo encontrará la felicidad. Es en la sociedad donde se desenvolverán los beneficios públicos y por ello el Estado tendrá que ser reducido a la mínima expresión: se crea así el Estado abstencionista bajo la consigna del *laissez faire*. La sociedad adquiere un carácter de supremacía frente al Estado. Por lo tanto, el Estado se legitimará

según las reglas y principios que conforman la racionalidad que engloba a la sociedad. Surge, en este sentido, el Parlamento configurado como única y definitiva instancia legitimadora del orden político liberal. Ya que se le concibe como sede del debate racional en el que se busca y encuentra la verdad a través del intercambio de ideas (Cebrián, 2013; De Vega, 1996).

No cabe duda que la constitución del Parlamento, tal y como se ha descrito, bebe de un nuevo concepto que es producto de ese momento racionalizador apuntado líneas arriba. Estamos hablando de la opinión pública. Las verdades únicas e inamovibles propias de los esquemas medievales serán desechadas. En su lugar encontraremos la libre expresión de pensamiento individuales y el intercambio de pareceres, lo cual conducirá a la gestación de unas verdades colectivas (Cebrián, 2013; De Vega, 1996; Pérez, 2008). «Se crea así, la noción de opinión pública burguesa como opinión general, racional y libre, generada espontáneamente en el seno de la sociedad» (De Vega, 1996:7). Breve inciso. Fíjese de nuevo en lo dicho, “opinión pública burguesa”. Es realmente importante tener en cuenta que los medios de comunicación se encuentran secuestrados por la burguesía industrial y financiera, y que éstos (los medios de comunicación) son uno de los grandes formadores de la opinión pública. Ya en 1900 los medios de comunicación sufrieron un paulatino robo de independencia, al encontrarse sometidos por el negocio publicitario por lo intereses imperialistas burgueses (Domènech, 2004)

Se entiende al Parlamento, por lo tanto, como órgano deliberante que se correspondería al nivel político con el concepto de opinión pública elaborado al nivel social. Pedro de Vega García lo expresará del siguiente modo:

Si la opinión pública burguesa, creada a través de la discusión espontánea y libre de los particulares, es la que traduce y expresa la interna racionalidad y el orden natural de la sociedad, el Parlamento, en cuanto prolongación de la opinión pública, tendrá que ser también por fuerza un órgano donde también se discuta espontánea y libremente (1996:9).

Tras el largo período histórico del Medievo, es a partir de la Edad Moderna – y especialmente en la Edad Contemporánea- cuando se reconocen las distintas opiniones, las cuales son sometidas al debate (De Vega, 1996). El deslumbramiento, en consecuencia a esa deliberación, de las verdades colectivas es lo que determinará en cada caso el interés nacional (De Vega, 1996; Pérez, 2008). La suma de intereses contrapuestos y, a menudo, enfrentados propios del esquema feudal es sustituida en el liberalismo burgués por la comunidad de intereses que viene representada por la nación.

Los representantes libres del mandato imperativo, deliberaran- fuera de constricciones- y expresan en el Parlamento la voluntad política ideal de la Nación. Reproducen en la esfera política los valores que se plasman en la opinión pública, en la esfera social (Cebrián, 2013; De Vega, 1996). La nación, por lo tanto, será la titular de la soberanía y la que es representada en la Cámara. Quedando en obsolescencia el mandato imperativo – propio de la Edad Media- y proclamando la inevitabilidad del mandato representativo (Cebrián, 2013). Volviendo al inciso anterior apuntado *supra*. Si la opinión pública se encuentra secuestrada por la burguesía y el Parlamento resulta «una prolongación de la opinión pública», necesariamente los burgueses serán los únicos que en principio podrán llegar al Parlamento.

Siguiendo con Zazurca en su obra *Sobre la democracia representativa. Un análisis de sus capacidades e insuficiencias* (quien muy a menudo recurre a A. Torres del Moral en *Democracia y representación en los orígenes del Estado constitucional*) se puede hacer un rastreo de cómo se dio el paso del mandato imperativo al mandato representativo.

El autor explica que el mandato imperativo es propio de las asambleas medievales⁵, en las que la representación responde a un esquema del Derecho privado y en el que el representante debe adherirse a los términos en los *cahiers d'instructions* que les proporcionan sus mandantes, ante quienes deben responder y por quienes pueden ser revocados (2013: 47).

La historia del sistema representativo es también la historia de cómo la alianza entre Nación, Parlamento, mandato representativo y opinión pública va poco a poco resquebrajándose y dejando al descubierto el artificio simbólico-intelectual que le sostenía. El problema surge cuando la existencia de una verdad social única se pone en duda y cuando la propia noción de opinión pública se muestra como invención ideológica (Cebrián, 2013; De Vega, 1996). El tipo de representación indirecta, el principio de distinción para ocupar los cargos y el sufragio censitario⁶ masculino son

⁵ «En la Edad Media existía un principio [...], de origen romano, que se formulaba del siguiente modo: *Quod omnes tagit, ab ómnibus tractari et approbari debet*. (Lo que a todos afecta, debe ser aprobado y tratado por todos). Este principio es conocido por la abreviatura QOT (*Quod omnes tangit*). La invocación de este principio en el Medievo significaba que un deseo de *arriba* había de lograr la aprobación de *abajo* para convertirse en un mandato legítimo que generase obligación.», Enrique Cebrián Zazurca., (2013: 34).

⁶El sistema se reinventa para dejar fuera a las clases sociales más bajas de su derecho al voto. Si antes el sistema lo hacía de un modo formal y normativo, ahora se sofisticaba. Así es como nos los muestra Luciano Canfora: «Como es sabido, las crónicas de las elecciones presidenciales americanas que aparecen en los periódicos europeos nunca ofrecen, o casi ocultan, los resultados obtenidos por los candidatos *en términos de votos*; sólo se ofrecen los porcentajes. Se pretende ocultar (en Europa se considera una práctica

tres fórmulas que sirven para asentar y perpetuar en el poder a la clase social hegemónica: la burguesía industrial y financiera (Rubio Carracedo, 2007; Domènech, 2004). Hablar de una opinión pública común y unánimemente compartida como criterio de legitimación, resultará, cuanto menos, una ficción irritante. La realidad mostrará que la sociedad está más bien fragmentada y compuesta por intereses distintos y contrapuestos (Cebrián, 2013).

Como consecuencia de esta crisis- en la que ha quedado patente la división de los distintos sectores sociales y la desconstrucción del momento ideológico de la verdad y la razón articulada en torno al concepto de opinión pública y Nación- entrarán en escena nuevos actores políticos: los partidos. Se da de este modo el paso de los partidos de cuadros a los partidos de masas, el tránsito del sufragio como función, al sufragio como derecho político fundamental, del sufragio censitario masculino al sufragio universal masculino (Cebrián, 2013; De Vega, 1996).

Pero si el nuevo sujeto político aparece como causa de la crisis expuesta, éste, evidentemente, no dejará de producir, por su parte, consecuencias. La política parlamentaria contraerá una especie de esquizofrenia. Pues mientras se seguirá- y se sigue- defendiendo la independencia de los diputados en el Parlamento, la verdad impone una realidad diferente: la existencia del mandato imperativo. Lo que conllevará a una paradoja interna del propio sistema de representación.

3.1.1 Paradoja interna

La paradoja interna del sistema representativo (el origen de su crisis) se plantea tan pronto como se contrapone el esquema ideal del parlamentarismo representativo. El Parlamento es concebido como el lugar donde los representantes de la ciudadanía debaten de forma racional, libre y sin restricciones en la elaboración de las leyes como manifestaciones de la soberanía nacional. Esta idea acabará chocando con una realidad que contradice a su inocente formulación teórica. La opinión pública ilustrada, idealmente formada por la razón, entrará en jaque. Pues se hace más que evidente que en el seno de cualquier sociedad convergen múltiples intereses (Ramírez, 2014;

vergonzosa, si se llegara a conocer) que en Estados Unidos la mayoría de quienes tienen derecho al voto no ejercen ese derecho. El mecanismo es simple. El certificado electoral no se envía a los ciudadanos, como ocurre en Europa, sino que son los ciudadanos quienes deben ir a buscarlo, a solicitarlo. Y muchísima gente no lo hace: por distintas razones, entre las que destaca obviamente el abstencionismo político de las comunidades más pobres y marginales. Por otra parte, muchos de los que recogen el certificado tampoco votan. En resumen, el vencedor representa a una escasa minoría de la ciudadanía» (2003:28).

Cebrián, 2013; De Vega, 1996), múltiples y antagónicos en el caso de las sociedades de clases. Y en tanto que son antagónicos la clase dominante se muestra especialmente interesada en que las clases subalternas⁷ no puedan conseguir sus intereses (Mouffe, 1999; Piqueras, 2018).

Junto con este fenómeno descrito, el decaimiento del modelo representativo liberal confluye con el paulatino tránsito (no sin pocas luchas por parte de la izquierda europea del siglo XIX) de los partidos de cuadros a los partidos de masas, dando pie a una nueva evolución democrática tras el paso del sufragio censitario al sufragio universal masculino (Cebrián, 2013; De Vega, 1996). «Se trata de dos fenómenos que se influyen mutuamente y que terminan por dibujar un perfil de la representación muy distinto del que existía hasta ese momento» (Cebrián, 2013:64).

Con la irrupción de los partidos políticos, la relación entre el representante y el representado cambiará drásticamente. Pues, aunque el diputado no está formalmente obligado al cumplimiento de las directrices de las cúpulas del partido, lo cierto es que las dinámicas parlamentarias han demostrado que son muy pocos los que se salen de la disciplina de partido. El grupo parlamentario, imagen del partido político en el Parlamento, constituye un organismo compacto que actúa con una sola voz, que mide su fuerza con el resto de grupos parlamentarios por el número de miembros que los integran.

Así, mientras se sigue proclamando y defendiendo la independencia del diputado mediante el mandato representativo, la realidad muestra la presencia de un mandato imperativo del partido respecto a los diputados. La relación del representante y representado se rompe de esta manera de *facto*, contrayendo una nueva «relación entre votante y partido político» (Ramírez, 2014: 181).

Esta paradoja interna del propio sistema representativo no es ajena en nuestro Estado. Reflejo de ello son los artículos 6 y 67 de la Constitución. Donde se reconoce a los partidos políticos como asociaciones que expresan el pluralismo político y establece que su funcionamiento y estructura interna deberán ser democráticos (artículo 6 de la CE), y en el artículo 67 de la CE se desvincula a los diputados de las Cortes Generales del

⁷ Concepto gramsciano. Se entiende por «clase subalterna» el conjunto de una población que se encuentra en una condición de subordinación, sujeta a una serie de relaciones de dominación tanto culturales, sociales como ideológicas (Piqueras, 2017).

mandato imperativo. Algo que contrasta abiertamente, tal y como lo expone Manuel García Pelayo en su obra *El Estado de Partidos* (1986), con una realidad que muestra a una Parlamento secuestrado por la disciplina de voto, a unos candidatos que provienen de listas cerradas, elegidas desde las cúpulas de sus respectivos partidos, y que por lo tanto la ciudadanía no vota a los diputados, sino que su relación se establece con el partido político.

3.2 Secuestro de la voluntad general

Llegados a este punto resulta necesario un inciso, que nos conduce hacia lo que se ha denominado en el título del apartado *El secuestro de la voluntad general*. La controversia entre el mandato imperativo y el mandato representativo no es ajena a un debate todavía mayor y más extenso: el de la democracia representativa y la democracia directa. Es J.J. Rousseau, el autor por excelencia, quien reflejará la eterna disyuntiva entre democracia directa y democracia indirecta, entre democracia de la identidad y la democracia representativa (De Vega, 1996).

El ginebrino caerá en la cuenta de la contradicción que contrae la democracia representativa. Pues en ésta la ley deja de ser expresión de la voluntad general para convertirse en la pura expresión de los representantes. El liberalismo encontrará su legitimación a la hora de elaborar las leyes en el momento universalizador burgués. Frente al entendimiento absolutista de la ley, concebida como voluntad y mandato, la burguesía presentará ahora un concepto racional de ley (1996: 6,9).

La idea de representación se reconcilia y se confunde así con la idea de legitimidad, en la medida en que la representación no traduce ya una voluntad general artificialmente construida sobre la suma de voluntades individuales, sino que aparece como expresión directa del orden natural que opera en el seno de la sociedad y que se manifiesta en el concepto de opinión pública (1996: 7).

Debido al tamaño que habían adquirido los Estados, la práctica de una democracia directa, en la que toda la ciudadanía puede participar en la institución parlamentaria, se mostró inviable. Por lo que la soberanía democrática fue sustituida por la idea de una soberanía de la razón. He aquí el secuestro de la voluntad popular.

Jean-Jacques Rousseau ante los hechos cuantitativos se vio obligado a aceptar la democracia representativa como un mal necesario. No obstante, exigirá dos requisitos fundamentales para ello: por un lado, que el poder de los representantes ha de estar guiado por el pueblo (mandato imperativo). Por otro lado, toda decisión tomada en el

Parlamento ha de estar ratificada por la ciudadanía; de no ser así, toda ley será nula (1996: 12).

Realmente lo consecuente hubiera sido seguir las exigencias roussebianas, propias de una democracia representativa directa. Puesto que el propio axioma liberal más básico indica que: «el individuo es el único intérprete autorizado de sus intereses que nadie puede representar en su lugar» (Rubio Carracedo, 2007: 59). Pero evidentemente no interesaba. Y no interesaba sencillamente porque el liberalismo triunfante en las revoluciones era el que representaba a la burguesía comercial e industrial, que constituía el estamento más activo y hegemónico; el modelo de representación indirecto permitía trasladar al ámbito público las desigualdades de poder en el ámbito privado (2007: 60). ¿Quién tendría oportunidades reales de presentarse como candidato? Quien tuviera poder económico y amplias relaciones sociales para darse a conocer al electorado. Enrique Cebrián Zazurca explica así este suceso:

A los fundadores del gobierno representativo no les preocupaba que las elecciones diesen lugar a una distribución no igualitaria de los cargos, puesto que su atención se centraba en el derecho a consentir. A esto se le sumaba otra característica no igualitaria: el principio de distinción. Estamos ante unos fundamentos elitistas, pues la base de este principio recaían en el pensamiento que los representantes debían ser socialmente distintos a quien los eligieran, con lo que las elecciones adquieren un claro tinte aristocrático. (2013: 36-37)

Con todo lo que se está apuntando subyace otra cuestión, con la que merece la pena repensar: ¿es la representación fruto de la nación? O, más bien ¿la nación surgió como una exigencia de la representación? Bajo este último supuesto, en el que es más bien la representación la propulsora de la doctrina de la soberanía nacional, se encuentra José Acosta Sánchez. Afirma que «la representación del poder significa su posesión de hecho y la nación política es la primera creación en el Estado moderno para legitimar esa correlación» (1994:101).

En efecto, el problema que se presentaba tras la crisis del Estado absolutista y, con ella, la pérdida del poder, tanto ideológico como de hecho, del rey, giraba en torno «a quiénes, qué clase o clases representarían al nuevo poder, y secundariamente pero enfáticamente, en torno a la legitimidad del nuevo poder o problema de la soberanía» (Acosta, 1994:102). Este problema que presenta Acosta es así tanto que existe una verdad a todas luces cierta, pero pocas veces dicha: quienes representan el poder lo poseen.

Con la disolución del poder en manos de una sola persona, el monarca, la legitimación de la titularidad del poder se fue reconduciendo del singular al plural. Ahora bien, es muy importante poder identificar que en toda esta cuestión operan dos realidades. La real y la hiperrealidad, tal y como lo podría explicar J. Baudrillard (1981) en *Simulacre et simulation*. Si en la fábula de Borges, que emplea el filósofo francés para introducir su obra, el mapa llegaba a cubrir la realidad hasta hacer indistinguible lo ficticio con lo real, el plano teórico-ideológico de la representación actuará de la misma forma respecto a la posesión formal de la representación. Es decir, en su sentido teórico-ideológico los herederos del poder, que encarnaba hasta el momento la monarquía, era la ciudadanía. Actuando, de este modo, con una gran carga simbólica. Pero los herederos reales de dicho poder fueron los representantes de la ciudadanía. Se ve aquí la analogía con Baudrillard (Acosta, 1994).

¿Quiénes son los representantes de la ciudadanía? Se ha podido ver a lo largo del trabajo la inquina y el terror de las clases altas, con propiedad, hacia los desposeídos, las clases bajas trabajadoras. Y cuáles han sido los métodos para impedir el acceso igualitario al poder. En este punto se halla la formulación teórica por la cual se afianzan con el poder político la burguesía, apoyada mediante el concepto de Nación.

Durante mucho tiempo, la nación se ha referido exclusivamente al monarca y a la nobleza, quedando el Tercer Estado relegado a la condición de pueblo. Por lo que el término de Nación parte de unos supuestos eminentemente elitistas y clasistas. Con la crisis de los estados absolutistas la burguesía necesitaba asegurar su poder. Por lo que muy pronto se empezó a utilizar el término de Nación para poder efectuar su representación del poder (Acosta, 1996). La escisión del Tercer Estado no tardó mucho en hacerse palpable, más bien ocurrió desde los principios de la constitución del Nuevo Régimen. Cuando en la Asamblea Nacional de 1789 se aprobó la diferenciación de los ciudadanos entre pasivos y activos. Es decir, entre aquellos que desposeían alguna propiedad y que por lo tanto sólo eran merecedores de derecho civiles, por un lado, y entre aquellos que poseían propiedad y que gozaban de derechos políticos y civiles, por el otro lado (Domènech, 2004). Como se decía, la ruptura con el Viejo Régimen supuso:

Para el pueblo llano era la promesa de la plena incorporación de todos a una nueva sociedad civil de libre e iguales (recíprocamente) y de una vida social sin dominación ni interferencias patriarcales. Mientras que para los burgueses era la esperanza de su incorporación a una nueva sociedad civil de libres e iguales que disolviera las rigideces, las segmentaciones, los privilegios y las barreras arancelarias del viejo régimen, así como

de una vida política, en la que el poder estuviera sujeto a *su* control fiduciarios (Domènech, 2004: 78).⁸

De esta manera, la nación acabó por absorber «el pueblo como una masa de ciudadanos “pasivos”, representados y obligados por las decisiones de los “activos”, sin elegirlos» (Acosta, 1996:106). La formulación teórica de la nación permitió crear la ilusión de una participación de toda la población pero apartando al pueblo, a su vez, de oportunidades reales de un poder político efectivo. Todo ello a través del principio de representación apoyado en el artificio de una representación común indivisa.

Pero con todo, la sociedad indivisa era, como ya se ha dicho, ficticia. Por eso, la invocación al *nacionalismo* por parte del Estado era imposible, porque su sociedad estaba frontalmente dividida en «dos naciones» o en «dos mundos» (Domènech, 2004: 145, 146). A saber, por la «canalla»⁹, la chusma, aquellos que no tenían más remedio que trabajar con sus propias manos para subsistir y por los poseedores. La asimilación de las «dos naciones» no se produjo hasta el logro en mejoras de protección social, no sin largas luchas, eso sí, por parte de la izquierda. De este modo, primero, se produjo una integración de la fuerza de trabajo («nacional» y masculino) y, después, durante la etapa «keynesiana» se acabó de rematar la integración del Trabajo. La nación de segunda (aquellos que pertenecían a la «chusma») sucumbía a la nación de primera, la clase frente a la homogeneización de la nación (Piqueras, 2017: 99).

El capitalismo industrial se asentó sobre el modelo de nación, donde el Estado se convirtió en «la entidad rectora de la acumulación capitalista» (Piqueras, 2017: 98). El capitalismo industrial estaba compuesto por la burguesía industrial junto con la burguesía financiera (el aumento de la escala productiva en la industria demandaba la financiación de los bancos, de ahí su alianza), las cuales requerían de la construcción nacional para su expansión imperialista y dominio sobre los gobiernos. En poco tiempo las oligarquías industriales y financieras no sólo obtuvieron un total monopolio económico, sino que además empezaron a controlar la política, convirtiendo los Estados en una «plutocracia» (Domènech, 2004).

⁸ El resaltado es mío.

⁹ «Ya vemos perfectamente, a través de vuestras falsas máximas de libertad y de vuestras grandes palabras de igualdad, que, a vuestros ojos, no somos sino la canalla», Marat en 1790 en pleno debate en la Asamblea Nacional por la división de los ciudadanos entre pasivos y activos (Domènech, 2004: 12).

3.2.1 Paradoja externa

Se entiende que un Estado es «plutocrático» cuando su gobierno está en manos de las clases más altas. Cuando quienes dominan los recursos materiales y de producción poseen, además, el control del poder político. Lo que implica que las medidas de los gobiernos, eminentemente dominados por una casta «plutocrática», estén encaminadas a favorecer a esta minoritaria élite económica, en detrimento del resto de la población. Unas políticas que van en especial dirigidas a favorecer los intereses imperialistas de la susodicha casta (Domènech, 2004).

Respecto al secuestro del Estado por parte de la burguesía industrial y financiera en pro de conseguir sus propios intereses de clase imperialista, se puede encontrar el testimonio del economista inglés J.A Hobson en su ensayo *Imperialism a study*, redactado a principio del siglo XX (Domènech, 2004). Un ensayo que pudiera servir como premonición a lo que tendría que suceder años más tarde, especialmente a partir de los ochenta de ese mismo siglo: la globalización o mundialización (Berzosa, 1999; Berzosa y Martínez, 2009).

Desde los albores del capitalismo, este sistema siempre ha necesitado [...] un sistema interestatal, es decir, un marco jurídico-político compuesto de alianzas y arreglos de poder para hacer posible el proceso de producción, circulación y acumulación de plusvalor en los circuitos internacionales. Esto implica que el capital siempre ha requerido del Estado para los requerimientos de la acumulación a escala internacional (Romero, 2010).

Antes que nada, cabría puntualizar que el término de globalización o mundialización puede conducir a numerosos estudios y hacer de estas breves líneas un extenso trabajo, el cual supondría un punto y aparte respecto al presente. Su propio ADN (del término en cuestión) hace que contenga un carácter polifacético, ya que hablar sobre la globalización podría hacerse desde una multitud de dimensiones: sociales, culturales, políticas, jurídicas y/o económicas. No obstante, aquí tan solo se abarcará el lado económico del concepto.

La globalización económica responde a la necesidad de reproducción capitalista, en donde el capital se internacionaliza y se superan las fronteras políticas. Se produce una internacionalización de los mercados de bienes y servicios, las compañías planifican su desarrollo, producción, comercialización y gestión en diferentes puntos del planeta. Es decir, lo que produce es una desregulación nacional y una internacionalización de los mercados financieros, lo que ha conllevado a un incontrolado crecimiento de circulación

del capital y respectiva inversión especulativa que busca un beneficio rápido y a corto plazo (Berzosa, 1999; Berzosa y Martínez, 2009).

Esta globalización de los flujos financieros y de producción tiene su sustento teórico en un *laissez faire, laissez passer* 2.0, que además contiene la particularidad de haber creado a un Estado con una cero capacidad de rendición de cuentas hacia su ciudadanía, con la que contrae, cuanto menos, responsabilidad moral. Y en cambio, se postra ante los mercados financieros con los que ha contraído deuda, una deuda que proviene de un capital de interés cada vez más y más ficticio. De este modo, se produce un “Estado pos-soberano” o “deudor”, un Estado que ha dejado de ser mediador entre la eterna tensión entre Capital/Trabajo, para posicionarse del lado del Capital. Quedando, así, privatizado. Por ejemplo, los Estados europeos, en vez de emitir su propia moneda (han renunciado a hacerlo) y con ello poder respaldar su gasto, contraen deuda con la Banca privada, a tasas de interés relativamente altas. Con ello se endeudan voluntariamente con el capital privado, claro signo de que el Estado ha sido también “privatizado”, pues a quien responde es al Capital. Por eso siempre priorizarán pagarse a sí mismos (sus propias deudas) antes que destinar los fondos a la sociedad (Piqueras, 2018). El neoclasicismo reinante, al que se está aludiendo, sepultó en los años ochenta, aunque con mayor contundencia tras el fin de la URSS, el paradigma keynesiano. En el cual se aceptaba la coexistencia de la intervención estatal en la política económica con el libre mercado (capitalismo regulado) (Piqueras, 2017).

El neoclasicismo expande por doquier sus dos mantras: el libre mercado y la competitividad. Así, según este enfoque la política económica de los gobiernos queda relegada a un mero papel de espectador, donde solo le cabe garantizar la libre competencia. De ahí, de la “libre competencia”, dependerá el bienestar económico y social, cualquier país que pretenda salir de esta lógica lo hará poniendo en juego su propia supervivencia. El mensaje es bien claro: si los países quieren continuar en escena y ser, en consecuencia, “competitivos” y por ende garantizar la estabilidad económica, la cual, según esta doctrina, repercutirá en el bienestar de su ciudadanía, deberán liberalizar y desregular sus propias economías, y hacer una clara apuesta hacia la privatización (Berzosa, 1999; Berzosa y Martínez, 2009). En aras de la competitividad y búsqueda de una mayor productividad, riqueza y poder se incentiva la desregulación en los Estados y la privatización de las empresas y servicios públicos. Lo que contrae dos consecuencias principales; a) una reproletarización de la fuerza de trabajo (con la

consiguiente pérdida de soberanía popular), y b) una generalizada pérdida de soberanía nacional.

Por lo que se refiere a la primera consecuencia, lo primero que se ha de aclarar es que desregulación no es otra cosa que un eufemismo. Ya que lo que supone realmente es la regulación unilateral de los mercados y de las sociedades por parte de la clase capitalista, con la consiguiente pérdida de leyes y normas reguladoras que garantizan un trabajo digno (salario, jornadas laborales que compatibilizan con la familia y con el tiempo de vida, vacaciones, prestaciones en la enfermedad y en la vejez...). En aras de ese mismo objetivo, se produce una deslocalización de las empresas en países donde la fuerza de trabajo es más vulnerable y barata. Por otra parte, la acelerada «sustitución del trabajo vivo (seres humanos) por el trabajo muerto (máquinas) con la automatización y la robotización» (Piqueras, 2017: 101), está expulsando a más y más fuerza de trabajo de los procesos productivos, empobreciendo a la población, lo que dispara las desigualdades sociales y redundando en una concentración de la riqueza en una minoritaria élite social (Piqueras, 2017: Romero, 2010).

Pero la desregulación y la tendencia a privatizar todo lo público tiene otra consecuencia (ya apuntada), la pérdida de soberanía de los Estados. Los poderosos movimientos especulativos, sustentados por una política de deslocalización y libre mercado y, ya como último garante, la supeditación de las constituciones a los organismos supranacionales, ha conducido a los Gobiernos a una minoría de edad, quedando tutelados por el mercado financiero, el cual se encarga de vigilar la “buena conducta” de los Gobiernos. Por lo tanto, se crea un mensaje de inevitabilidad de las consecuencias del mercado, así como de impotencia en los propios gobiernos nacionales (Romero, 2010). Y por si todo ello fallara, si algún Estado tratara de recuperar su soberanía y/o el resultado de las elecciones no fuera del agrado de los intereses del mercado siempre cabe la amenaza del caos (Piqueras, 2018). Por poner un mero ejemplo sólo cabe recordar a Grecia, cuando en 2015, tras ganar las elecciones el partido de izquierdas liderado por Alexis Tsipras, se puso sobre el tablero una serie de medidas que pretendía acabar con las políticas de austeridad marcadas por la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo, BCE, y el Fondo Monetario Internacional, FMI). Grecia era noticia en todo el mundo, y sólo faltó contra ella la amenaza de las diez plagas de Egipto, hasta que se consiguió anular los resultados del referéndum.

De esta guisa el papel de los Estados-nación en el control de sus propios asuntos está cada vez más en cuestión (Petrella, 1991). Ya que «la internacionalización de la producción, finanzas y otros recursos económicos erosiona inexorablemente la capacidad de un Estado individual para controlar su propio futuro democrático» (Held, 1997: 166). Lo que conduce a una paradoja externa del propio sistema de representación. Pues mientras se crea la ilusión entre la ciudadanía de que existe un control hacia sus representantes políticos y de las políticas que se desempeñan en sus respectivos países, es en los organismos supranacionales donde se produce la política en mayúsculas, como reguladora del metabolismo social en su conjunto. Organismos que no son ni elegidos por la ciudadanía ni controlados por ésta.

Sobre la supeditación de las constituciones (Carta Magna) a las decisiones de los organismos supranacionales, en concreto la española, y el poco margen de maniobra para desarrollar herramientas de una democracia participativa, es de lo que se va a tratar en el punto siguiente.

4. ATADO Y BIEN ATADO

La apropiación de las instituciones democráticas y de los principios republicanos por parte de la burguesía industrial y financiera, en manos del liberalismo, ha conducido a la humanidad hacia una esquizofrenia colectiva, o como se ha llamado en el punto anterior; paradoja externa del propio sistema representativo. Mientras se proclama a viva voz y se defiende a capa y espada los principios republicanos (totalmente usurpados hasta el punto que hoy hablamos de valores liberales) de libertad e igualdad, lo cierto es que en las instituciones democráticas se toman decisiones que no llevan precisamente a materializar tales principios (Fernández, 2014).

Cierto es, que durante el transcurso de la historia el tercer principio republicano premeditadamente se fue quedando en el olvido. Este era la fraternidad. Sin ella no existe el reconocimiento mutuo, no existe las personas libres e iguales. Aunque, como ya se ha explicado, no hubo en ningún momento la intención por parte de la burguesía de extender los dos primeros principios de la consigna republicana. Más que solo para sí misma (Domènech, 2004).

Con la apropiación de las instituciones democráticas el imperio de la ley ha dejado de existir, y en su lugar nos encontramos gobernados por un oligopolio. Que dictamina leyes, crea instituciones que operan para su propio beneficio. En este sentido, «el capitalismo es radicalmente incompatible con el Estado de Derecho» (Fernández, 2014: 82). A pesar de la concesiones que se hicieron desde el Capital a la población trabajadora y de sus organizaciones políticas (producto de la incursión que se produjo de los representantes del proletariado a las instituciones), la democratización de las instituciones fue insuficiente. El encorsetamiento realizado a todo el orden político ha hecho muy difícil la tarea de devolver las instituciones a toda la población, y en consecuencia las organizaciones de trabajadores/as muchas acabaron por abandonar las instituciones democráticas y otras fueron engullidas por el propio orden político. El objetivo burgués fue siempre dejarlas instituciones democráticas inocuas, inoperantes – cosa que hoy prácticamente ha conseguido (Domènech, 2004; Fernández, 2014).

Lo lógico de todo ello, siguiendo con Carlos Fernández Liria, hubiera sido seguir con el hilo argumentativo que dejó Marx:

“un negro es un negro, solo bajo determinadas condiciones se convierte en un esclavo. Una máquina de hilar es una máquina de hilar, solo bajo determinadas condiciones se convierte

en capital. En tanto que máquina, ahorra esfuerzos a la humanidad y la libera del imperio de la necesidad. En tanto que capital, alarga la jornada laboral e impone al hombre el yugo de las fuerzas naturales”. No era tan difícil de entender. Y no es tan difícil de entender que lo mismo podría hacerse con nuestras tan vilipendiadas instituciones: un parlamento, es un parlamento, sólo bajo determinadas condiciones se convierte en una estafa, un ayuntamiento es un ayuntamiento, solo bajo determinadas condiciones se convierte en una cueva de ladrones, un tribunal es un tribunal, solo bajo determinadas condiciones se convierte en una broma de mal gusto. No se trata, pues, de inventar algo mejor o más lúdico, creativo o transversal que los parlamentos, los ayuntamientos y los tribunales, sino de cambiar sus condiciones (Fernández, 2017).

Evidentemente, no se siguió con la secuencia lógica como sugiere Carlos Fernández Liria del texto de Marx. Y en consecuencia el capitalismo quedó totalmente institucionalizado. Con corporaciones (como el Banco Central Europeo, BCE) que «escapan por ley al control político desde abajo» (Joshma, 2018) y donde, además, se ejerce un control sobre los propios estados. Ciertamente, «lo que hemos venido llamando “democracia” no son sino dictaduras económicas ataviadas con una fachada democrática» (Fernández, 2014: 90).

La pérdida de soberanía no es un acontecimiento que evidentemente surja de hoy para mañana. Sino que es fruto de una multitud de condicionantes y de una coyuntura concreta. En el caso español, al igual que tantos otros países, se dio, o al menos ya de una forma definitiva, tal situación tras ganar de forma democrática las elecciones un frente republicano democrático. Cuando eso ocurre, los “propietaristas” no están dispuestos a perder su *status quo*, y lo que viene después es un Golpe de Estado, una guerra civil o un bloqueo. España como bien se sabe no fue una excepción (Garcés, 2012; Fernández, 2014).

4.1 Pérdida de soberanía: España

Sobre el sometimiento de España a los intereses políticos, económicos y militares de EE UU y su pérdida de soberanía tanto exterior como interior, se encuentra el ensayo de Joan E. Garcés (2012). Mediante un gran esfuerzo documental no sólo arroja luz en tales cuestiones, sino que ayuda a poner fin a la azucarada versión de la Transición española:¹⁰

La soberanía popular fue secuestrada en 1939 por la Dictadura. A partir de ese momento la fuente del derecho era el caudillo, y el resto sus subordinados. Una de las claves de

¹⁰Los planteamientos presentado en este apartado (4.1 Pérdida de soberanía: España) se extraen íntegramente de la obra Joan E. Garcés (2012).

éxito de tal acontecimiento histórico radicaba en la alianza entre los líderes totalitarios: Hitler, Mussolini y Franco. No obstante, esta unión pronto flaqueó: la balanza en la guerra que se combatía en Europa apuntaba hacia un claro perdedor, las potencias del Eje. Por lo que la situación exterior para España estaba en jaque. La falta de apoyo exterior junto con el hecho que Franco a pesar de liderar el gobierno – compuesto por la Falange, la Iglesia y el Ejército - no ejercía control sobre él, ponía la continuidad del Dictador entre la espada y la pared.

Evidentemente estos hechos no pasaron por alto entre las potencias Aliadas. Que pronto se apresuraron en aprovecharon tal coyuntura para situar a España bajo su área de influencia. Un plan que empezaba por obligar a Franco a retirar su ayuda a Alemania.

Como sabe, un objetivo principal en nuestra política hacia España y Portugal ha sido mantener neutral a la Península Ibérica. Lo hemos logrado en gran medida creando y manteniendo en el ánimo de portugueses y españoles una conciencia de dependencia económica de nosotros. [...] Nuestra política comercial, combinada con nuestra propaganda y persuasión diplomática, han logrado el fin deseado de atraer España y Portugal cada vez más cerca de nuestra órbita de influencia y alejarles de la de nuestros enemigos¹¹ (2012:36)

La figura de Franco suponía seguridad para los planes de las potencias occidentales de la Guerra Fría y ésta, a su vez, también lo era para el Dictador. Ambos unidos contra la amenaza comunista. España tan sólo debía ofrecer su privilegiado emplazamiento (instalación de bases militares permanentes) y hacer una introducción paulatina hacia políticas económicas menos intervencionistas con el mercado. A cambio, Franco se aseguraba en el poder, así como la continuidad del *statu quo* generado durante la Dictadura. Esto era lo verdaderamente importante. Por estos motivos el futuro del gobierno de España ya estaba escrito, así queda reflejado en un estudio secreto del WarDepartment del 15 de diciembre de 1944:

Las fuerzas externas van a determinar el futuro de España. Los actuales intereses de EE UU y Gran Bretaña en el Mediterráneo occidental muestran la necesidad de estabilidad en la Península Ibérica, por lo menos hasta tanto que se haya podido encontrar una alternativa aceptable a Franco y la Falange [...]. En ausencia de una intervención directa de Rusia en España, el curso más probable de la política española en el futuro inmediato será la continuidad del régimen de Franco, que gradualmente va a despojarse de los atavíos fascistas, restaurar las formas políticas españolas tradicionales (con un acento propagandístico en torno de una “democracia a la española”), y extender de mala gana la mano a los exiliados políticos [...]. Si Franco cree que las Naciones Unidas va a insistir en su retirada del cargo, sacará su as en la manga – restaurar la monarquía [...]. Suceda lo que suceda, España no va a tener asignado un papel relevante en el mundo de la posguerra.

¹¹ Carta del subsecretario de Estado, E.R. Stettinius, al almirante W.D. Leahy, jefe del gabinete de Franklin D. Roosevelt (Garcés, 2012:36)

Ninguna de las grandes potencias ha mostrado disposición alguna de considerarla mucho más que un *emplazamiento geográfico*, importante en la medida que domina la entrada occidental al Mediterráneo y es parada de tránsito en las rutas internacionales (2012: 44, 45).

La restauración de la monarquía bajo la fórmula de una monarquía liberal, era una canción que agradaba tanto a la Coalición como la élite fascista española. Sólo había que esperar el momento idóneo:

no es aún momento oportuno para que Franco y el Ejército pasen el gobierno a los monárquicos. La evolución de España debe ser hacia la monarquía, pero lentamente – muy lentamente. No soy partidario de las democracias. Yo creo en el gobierno totalitario, pero debemos girarnos hacia las democracias que en realidad controlan el futuro inmediato [...]. España debe reorientar su política hacia la de los conquistadores¹² (2012: 65).

La matriz que debía seguir la Transición española estaba perfectamente delineada. Por un lado, se debía garantizar la continuidad del *statu quo* heredado del franquismo. Por otro lado, las políticas económicas neoliberales, según los intereses de la potencia hegemónica, debía seguir su curso. En este sentido, era esencial que el control de la soberanía popular una vez muerto el caudillo no fuera recuperado por los españoles. La pregunta es, ¿pero cómo hacerlo?

4.1.1 Constitución y técnicas que anulan la soberanía popular

El fin del ciclo biológico del Dictador podía suponer serios problemas para la continuidad de las estructuras socioeconómicas construidas durante el franquismo, y para la total integración de los intereses económicos, políticos y militares marcados por EE UU. Por lo tanto, se debía de dirigir a España hacia una «democracia controlada»; que facilitara la circulación del capital internacional y que dejara su soberanía en manos de las potencias occidentales y de los organismos creados por éstas.

Con tal de evitar los posibles peligros Alemania y EE UU llevaron a cabo una operación en secreto para financiar equipos, que en España pudieran dirigir al país después de Franco. No cabe duda que el punto político clave era evitar que los españoles no recuperaran su soberanía. En una circunstancia en la que los cuadros políticos en España son inexistentes, a excepción del Partido Comunista Español, millones de marcos y de dólares fueron invertidos en montar aparatos políticos que ocuparan el espacio político.

¹²Conversación entre Ramón Serrano Súñer (jefe de la Falange y ministro del Interior y Asuntos Exteriores hasta 1942) con Clyde L. Clark (agregado militar adjunto de EE UU), el 21 de enero y 6 de marzo de 1946 (Garcés, 2012: 65).

Los equipos cooptados compiten entre sí por el mercado de votos, tratando a la ciudadanía como si de consumidores se tratasen. Todo ello bajo una apariencia de rivalidad, con discursos e ideologías antagónicas. Pero que a la postre resultaban que seguían un guión muy parecido, dictado desde fuera. De hecho no se «cuestionaba las cesiones al capital multinacional en España – mayores que en tiempo del propio Franco-, al tiempo que se excluía de los programas cualquier referencia a “nacionalizar” alguna actividad económica o “reformular” algún sector productivo. El sistema español funcionaba dentro de las programadas coordinadas políticas, militares y económicas de desmovilización social y apatía política.» (Garcés, 2012: 187). Así, se puede comprender mejor que los partidos políticos respondieran ante las exigencias de quienes las financiaban que ante sus electores y/o afiliados.

El control sobre los partidos políticos, que debían presentarse en los primeros comicios, no dejaba de ser una mera táctica preventiva, un primero dominio. Lo verdaderamente decisivo se vaticinaba en la Transición. Recuértese el objetivo: mantener el control de la soberanía nacional. De esta manera, el sistema electoral elegido fue de listas cerradas y bloqueadas, con circunscripción provincial (la cual sobredimensiona el voto en las zonas rurales respecto de las ciudades, debido a que éstas tradicionalmente representan el cambio al contener mayor concentración de población y especialmente de población trabajadora organizada), con una sola vuelta y con una proporcionalidad corregida que evitase una mayor pluralidad (Acosta, 1994; Garcés, 2012).

En las últimas elecciones celebradas en 1936 el distrito era unipersonal. Con lo cual había una relación entre el elector y el elegido, existía un control personal sobre cómo se comportaban los representantes de la soberanía nacional, que eran comisariados por los electores, más que “representantes” impersonales. Por el contrario, con el sistema de listas cerradas y bloqueadas nadie sabe, ningún elector, quiénes serán finalmente sus representantes. Éstos, además, se deben antes a los líderes de su partido, que son quienes les ponen y quitan en esas listas, que a los propios electores (Acosta, 1994; Garcés, 2012). Se imposibilita, así, el ideal de la soberanía nacional, el cual recae bajo dos categorías: *accountability* y *responsiveness*. La primera supone la rendición de cuentas de los representantes hacia los representados sobre su gestión y decisiones políticas. La segunda categoría significa la capacidad del gobierno para dar respuesta a las exigencias y demandas de la ciudadanía (tanto en el plano legislativo como en el ejecutivo) (De Francisco, 2005).

Los mecanismos de control no acaban aquí. La redacción de la Ley Fundamental es una buena prueba de ello. Ya que quedó blindada a cualquier intento por recuperar la soberanía nacional. Así pues, tan solo se contemplan tres fórmulas para desarrollar una democracia participativa: a) referendo de ratificación de la reforma constitucional, b) referendo consultivo y c) iniciativa legislativa popular (Ramírez, 2012).

- a) Referendo de ratificación de la reforma constitucional. Queda regulado en los artículos 166, 167 y 168 CE. Mediante el 166 se excluye la iniciativa popular para la reforma de la Constitución, dado que mediante este artículo se remite al artículo 87 (por el que tan sólo se admite la iniciativa popular para la vía legislativa, artículo del que se hablará adelante). El referendo de ratificación de la reforma constitucional contiene dos maneras de abordarlo: por el artículo 167 (quedando la Constitución en su reforma sobre materias mayores) y por el artículo 168. En ninguno de los casos el referendo puede ser propuesto por la ciudadanía y, además, tampoco se explicita un requerimiento de *quórum* para la validación del resultado (Acosta, 1994; Ramírez, 2012).
- b) Referendo consultivo. Se desarrolla en el artículo 92 CE. Solo puede ser convocado por el Rey ante la propuesta del presidente/a del gobierno, que previamente ha contado con la autorización del Congreso de los Diputados. El acento de este artículo lo contiene un adjetivo, “consultivo”. Este mecanismo de participación directa de la ciudadanía queda totalmente anulado e inútil, dado que el resultado del mismo no tiene carácter de obligatoriedad para el gobierno. El sistema constitucional español tan sólo contempla el referendo consultivo, lo cual contrae una contradicción en sus propios términos. Un oxímoron, como la “música militar” (Acosta, 1994; Garcés, 2012; Ramírez, 2012).
- c) Iniciativa legislativa popular. Se contempla en el artículo 87.3 CE y desarrolla en la Ley Orgánica 3/1984 de 26 de marzo y parcialmente modificada en la Ley Orgánica 4/2006 de 26 de mayo. La ciudadanía puede hacer una proposición de ley siempre y cuando haya recogido un mínimo de 500.000 firmas. Ninguna proposición de ley ha progresado hasta la fecha debido a su complejidad y a que el gobierno no está obligado a considerarla. El ordenamiento español solo permite esta modalidad de iniciativa popular, no se regula en otros tipos como: solicitud de convocatoria de referendo, solicitud de derogación de una norma jurídica, reforma constitucional, ratificación de tratados internacionales, etc.

(Ramírez, 2012). En la última parte del artículo esclarece: «no procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.» (Constitución Española, 2007: 77).

En el artículo 87.3 de la CE aparece la primera prerrogativa a las organizaciones o instituciones internacionales. Supone toda una primera declaración de intenciones de lo que posteriormente quedará recogido en los artículos 93 y 96.1 CE. Mediante los cuales se establece que la transferencia de competencias inherentes al Estado a organismos e instituciones internacionales se procederá mediante Ley Orgánica, a su vez «sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las norma del Derecho internacional.» (Constitución Española, 2007: 81). Analícese con Garcés:

Ninguna Constitución europea incluye el equivalente del artículo 96.1 [...]. En otras palabras, un Gabinete con mayoría coyuntural en las Cortes tiene manos libres para cualquier pacto con Poderes extranjeros, sin que en principio pueda dejarlo sin efecto una mayoría parlamentaria posterior que los juzgara desfavorable a los intereses del país (2012: 182).

Ante todo lo descrito *supra*, ¿cuál es el resultado? El resultado es que mediante mecanismos de control (tanto «preventivos» como los activados durante la Transición, los cuales perduran hasta hoy) se ha conseguido que los órganos de representación estén anulados. La Transición política española consistió en sustituir a un estado fascista por otro estado que es vaciado – progresivamente – de todos los instrumentos del Estado (Garcés, 2012).

Se ha podido ver cómo cualquier instrumento propio de una democracia participativa, que la dotaran de soberanía popular, no fueron contemplados en la redacción de la Carta Magna, neutralizada. También cómo todo elemento que pueda dotar al Estado español de soberanía nacional ha sido usurpado – se reitera -, neutralizado. La pérdida del control monetario ha acabado con el último aletazo de la soberanía económica del país. Ya que una vez perdido dicho control, los órganos de poder representativos quedan privados para gestionar medidas (como la clásica devaluación de la moneda; para dar competitividad a los productos internos, aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones), en caso de crisis. “Obligando”, prácticamente, a devaluar el Estado de formar interna. Es decir, la fórmula de los recortes sociales (Lo Vuolo y Marques Pereira: 2016). De esta “suerte” «el bloque que encierra la mayor riqueza potencial de la

democracia española» (Acosta, 1998: 151), el bloque normativo de la Constitución que promueve el Estado social, sufre cada vez más y más retrocesos.

De esta manera, cuando hay un momento de crisis, como el que se ha venido desarrollando desde 2008, el bienestar social se va estrechando debido a las políticas antisociales emprendidas por el gobierno. Momento en el que queda al descubierto el distanciamiento entre representantes y representados. La visión negativa de los partidos políticos y de la democracia representativa se ha acentuado por el fenómeno de la crisis económica, y como consecuencia han surgido sucesivos movimientos ciudadanos de reivindicación (Ramírez, 2014). En este sentido, las palabras de Miguel Sánchez Morón resultan esclarecedoras:

el grado de conformismo depende en buena medida de la eficacia del sistema para suplir su carencia de participación real en las decisiones colectivas por el mantenimiento y ampliación progresiva de su bienestar material. Toda disfunción en este sentido genera conflicto social (1980: 63-64).

La aparición de movimientos como *Spanishrevolution*, 15M, PAH, las denominadas *Mareas*, Democracia Real o Primavera Valenciana se produce, precisamente, como un «desafío a esa definición neoliberal de la realidad (como un «NO» a todos los recortes sociales y a ese estrechamiento del estado de bienestar), y, paralelamente, como un «SÍ» a la producción de una nueva realidad» (Martínez Fernández, 2014: 392). Culminada y sintetizada por una petición de regeneración y profundización de la democracia. Hoy sin embargo, ha sido en gran medida canalizado de nuevo hacia la vieja institucionalidad política.

5. CONCLUSIONES

La democracia es el sistema donde el pueblo es titular del poder político. Esta afirmación es aceptada por la mayoría. Pero no ocurre lo mismo si a esta sentencia le añadimos la siguiente pregunta: ¿es cierto que el poder político reside en el pueblo? No es casual que las voces que reclamen una democracia real sean cada vez mayores y más y más altas. Sin lugar a duda, esto es síntoma que algo sucede, supone una señal: y es que la ciudadanía percibe que su acceso al poder político está limitado. Por lo que las preguntas que cabrían hacerse serían; ¿Por qué tal limitación? ¿Cómo se ha llevado a cabo tal situación?

Comparando diferentes épocas históricas se ha podido comprobar que siempre que ha habido algún intento de participación política, de asalto de las clases trabajadoras al poder político la oligarquía ha activado toda su maquinaria para ponerle freno. Mostrando, a su vez, su desprecio hacia aquellos que trabajan con sus manos.

Resulta realmente curioso cómo las expresiones de repulsa hacia los pobres se repiten, pase el tiempo que pase. Así como su argumentación, determinista, que vincula la capacidad de tener virtud, por ende, de generar bienes públicos con el hecho de pertenecer a una clase acomodada. Curioso, o no, pero lo realmente importante es señalar el denominador común de todo ello: la propiedad.

El republicanismo (tanto en su vertiente elitista, como en su vertiente democrática) coincide en la libertad como eje rector. Pues quien tiene libertad está a salvo de la dominación e interferencia de terceros, es capaz de juzgar y decidir por sí mismo. Esta persona, por lo tanto, será virtuosa. Pues su voluntad será firme y segura, siendo capaz de deliberar con prudencia alcanzando el fin más valioso de la vida: la felicidad.

Dicha argumentación extrapolada al campo político se traduce en: quien es libre posee virtud, y quien es virtuoso será capaz de generar bienes públicos. Generará felicidad para la comunidad. Por el contrario, quien está sujeto a la dominación de terceros será invirtuoso. Y por lo tanto, mirará antes por su propio bien que por el conjunto de la población.

Sin la propiedad la persona estará obligada a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir, estableciendo una relación de subordinación y dependencia respecto de su patrón. Con estas premisas el republicanismo elitista atajó rápidamente el problema:

estableció la diferenciación entre ciudadanos pasivos y ciudadanos activos; sin derechos políticos y con derechos políticos; implantó el sufragio censitario. Por su parte, el republicanismo democrático ha tratado de combatir la dependencia material, a fin de incluir a toda la ciudadanía en el juego político. Haciendo extensibles los valores de igualdad y libertad.

Otro elemento en el que coinciden las dos alas del republicanismo es en establecer medidas que impidan la concentración de poder, la tiranía. Unos instrumentos que provienen de la doctrina de la división del poder y del equilibrio de poderes. Se llega a la conclusión que los presupuestos teóricos que avalan ambas doctrinas son completamente necesarios. Ya que permiten que el gobierno no decaiga en la tiranía y la corrupción. Pero la clave está en la forma en la que se implantan los instrumentos que han de hacer de frenos y contrapesos. Pues detrás de ellos se puede esconder que sus resultados vayan encaminados a favorecer a un determinado grupo reducido, obviando el bien común y la voluntad general.

El estudio sobre la construcción del sistema representativo resulta imprescindible, por un lado, para desenmascarar el artificio ideológico (pues su construcción sirvió para asentar en el poder a la clase social hegemónica: la burguesía industrial y financiera) y, por otro lado, para comprender la paradoja interna que esconde el propio sistema.

La paradoja interna del sistema representativo se plantea tan pronto como se contrapone el esquema ideal del parlamentarismo representativo. La idea del Parlamento como el lugar donde los representantes de la ciudadanía debaten de forma racional, libre y sin restricciones en la elaboración de las leyes como manifestaciones de la soberanía nacional, chocará con una realidad que contradice su formulación teórica. Pues en el seno de cualquier sociedad convergen múltiples intereses y antagonismos. Junto con este hecho confluye otro elemento. Mientras se sigue proclamando y defendiendo la independencia del diputado mediante el mandato representativo, la realidad muestra la presencia de un mandato imperativo del partido respecto a los diputados. Se contrae, por lo tanto, una nueva relación entre el partido político y el votante. Ambos son los causantes de la paradoja interna del sistema representativo.

La consolidación de la burguesía industrial y financiera en el poder político, no se podría haber llevado a cabo sin que ésta hubiera heredado la representación del poder que dejaba el monarca a partir de las crisis de los estados absolutistas. Pues quienes

representan el poder lo poseen de hecho. Aunque de forma teórica se formuló que el heredero del poder que encarnaba el monarca fuera el pueblo, lo cierto es que los herederos reales fueron los representantes. Unos representantes que mediante la implantación de instrumentos con sesgos claramente elitistas y contramayoritarios, y con un sistema representativo indirecto, no hacían más que representar (como delegados de los poderosos) al estamento alto y hegemónico: la burguesía industrial y financiera.

La consolidación de esta clase en el poder político, ha supuesto el secuestro del Estado. Lo que ha implicado que las medidas de los gobiernos estén encaminadas a favorecer a esta minoritaria élite económica, en detrimento del resto de la población. Unas medidas que también están dirigidas a perpetuar su dominio, y por consiguiente a limitar la participación política de quien es soberano legítimo formalmente: la ciudadanía.

En consecuencia, la capacidad de los gobiernos para controlar su futuro democrático es limitada. De ahí nace la paradoja externa del sistema representativo. Pues mientras se crea la ilusión entre la ciudadanía de que existe un control hacia sus representantes políticos y de las políticas que se desempeñan, es en los organismos supranacionales (creados y controlados por la oligarquía financiera) donde se produce las decisiones de gran calado.

Una forma de controlar a los estados es supeditando la Cartas Magnas a los organismos supranacionales. En este sentido, he querido dar voz a la supeditación de la Constitución española. Para ello he narrado cómo se va entramando ese proceso y luego mediante el estudio de los artículos que componen la Constitución y el sistema electoral establecido, hemos podido llegar a la conclusión de que la soberanía nacional y popular quedó limitada en España.

Con todo, cabe concluir que ante los fenómenos descritos nos encontramos ante unos Estados vaciados tanto de su poder económico como político. Que éstos continuando siendo un instrumentos político fuerte del dominio de clase, pero han perdido parte de su papel como espacio en la articulación de la democracia. También es muy significativo que ante situaciones de crisis, el empobrecimiento de la sociedad se acelere. Lo cual genera una demanda de la ciudadanía de control sobre sus instituciones democráticas; más democracia, más democracia participativa.

En este punto soy consciente de que este trabajo termina donde deber empezar otro estudio para evaluar cómo se está produciendo la apertura hacia políticas más participativas. Es decir, sobre qué puntos se está dejando decidir, ¿estamos hablando de metapreferencias, o solo de preferencias entre opciones que nos vienen dadas? Y en el caso que sólo se decida sobre preferencias, esta situación a qué se debe y cuáles son sus razones.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

ACOSTA SANCHEZ, J., (1994): *La articulación entre representación, constitución y democracia. Génesis, crisis actual y Constitución española*, Revista de Estudios Políticos, octubre-diciembre, 86, 99-152.

ARISTÓTELES, (2011): *La Política*, Madrid, S.L.U Espasa Libros.

ARISTÓTELES, (2014): *Ética a Nicómaco*, Madrid, Gredos.

ASCHERIA, M., (2003-2006): *Las ciudades-estado italianas de la Edad Media y la herencia de Roma*, Revista de Historia Medieval, 14, 7-20. Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/11579/1/Historia_Medieval_14_01.pdf

Consultado: 23/06/2018

AGUIAR, F., (2005): *¿Un Adam Smith republicano?*, en BERTOMEU, M, J., DOMÈNECH, A., DE FRANCISCO, A., (Eds.) (2005): *Republicanismo y Democracia*, Madrid, Miño y Dávila.

BERTOMEU, M, J (2005): *Las raíces republicanas del mundo moderno: en torno a Kant*, en BERTOMEU, M, J., DOMÈNECH, A., DE FRANCISCO, A., (Eds.) (2005): *Republicanismo y Democracia*, Madrid, Miño y Dávila.

BERTOMEU, M, J., Y OTROS, (2018): *La propuesta de la Renta Básica de Ciudadanía*, Sin Permiso, Enero, 14-21. Disponible en: http://www.sinpermiso.info/sites/default/files/escritos_sp_antoni_domenech.pdf

Consultado: 10/07/18

BERZOSA, C., (1999): *Mercado, Estado y Economía Mundial*, Universidad Complutense de Madrid, Revista de Economía Mundial, 1, 29-50

BERZOSA, C Y ALONSO MARTÍNEZ, (2009): *La hegemonía de las finanzas en la situación económica mundial*, Universidad Complutense de Madrid, Revista de Economía Mundial, octubre, 23, 53-66.

BOBBIO, N., (2001): *La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político*, Mexico, Fondo de Cultura, 33-43.

CANFORA, LUCIANO, (2003): *Crítica de la Retórica Democrática*, Barcelona, Crítica.

CEBRIÁN, ZAZURCA, E., (2013): *Sobre la democracia representativa. Un análisis de sus capacidades e insuficiencia*, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (2007): Madrid, Tecnos.

DE FRANCISCO, A., (2001): *¿Quién teme al republicanismo?*, en *El País*. 06 de diciembre de 2001. Enlace:

https://elpais.com/diario/2001/12/06/opinion/1007593209_850215.html

DE FRANCISCO, A., (2005): *Para forzar a los gobiernos a responder*, en BERTOMEU, M, J., DOMÈNECH, A., DE FRANCISCO, A., (Eds.) (2005): *Republicanismo y Democracia*, Madrid, Miño y Dávila.

DE VEGA, P., (1998): *Legitimidad y representación en la crisis de la democracia actual*, WorkingPaper n.141, Barcelona, Universidad Complutense de Madrid. Disponible: https://www.icps.cat/archivos/WorkingPapers/WP_I_141.pdf?noga=1

DOMÈNECH, ANTONI, (2004): *El eclipse de la fraternidad. Una revisión republicana de la tradición socialista*, Barcelona, Crítica.

DOMÈNECH, ANTONI (2018): *Prólogo a Las condiciones materiales de la libertad de Daniel Raventós*, Sin Permiso, Enero, 58-63. Disponible:

http://www.sinpermiso.info/sites/default/files/escritos_sp_antoni_domenech.pdf

Consultado: 03/07/18

ESCAMILLA, J., (2004): *Los fundamentos socioeconómicos del derecho en La ideología alemana de Carlos Marx*, México, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.

Disponible en: <https://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/13/13-04.pdf>

Consultado: 8/07/2018

FERNÁNDEZ NIETO, FCO (COORD)., (2005): *Historia antigua de Grecia y Roma*, Valencia, Tirant lo Blanch.

GARCÉS, JOAN, E., (2012): *Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles*, Madrid, Siglo Veintiuno.

GARGARELLA, R., (2003): *Jueces rigurosamente vigilados*, en *El País*. 23/01/2003 Enlace:

https://elpais.com/diario/2003/01/23/opinion/1043276407_850215.html

HELD, D., (1997): *La democracia y el orden global*, Buenos Aires, Paidós.

LO VUOLO, RUBÉN Y JAIME MARQUES PEREIRA (2016): *De la pérdida de soberanía monetaria a la pérdida de soberanía política: los ejemplos de Argentina y Grecia*, Lyon, Colloque International, Institutionnalismesmonétairesfrancophes: bilan, perspectives et regards internationaux, del 1 al 3 de junio. Disponible en: <https://imf2016.sciencesconf.org/84465/document> Consultado: 02/09/2018

MALATESTA, P., (2015): *La Comuna de París: la primera revolución del proletariado*, en *La Izquierda Diario*. 18/03/2015. Enlace: <https://www.laizquierdadiario.com/La-Comuna-de-Paris-la-primera-revolucion-del-proletariado>

MARTÍNEZFERNÁNDEZ, A., (2014): *La escritura del shock: crisis y poesía en España*, Kamchatk, nº4, 383-434.

MARX, K., (1989): *Introducción general a la crítica de la economía política / 1857*, Madrid, Siglo Veintiuno.

MERCATANTE, E., (2018), *RENTA BÁSICA UNIVERSAL, ¿una solución a los males del capitalismo?*, Seminario, *La Izquierda diario*. 01/07/2018 Disponible en: http://www.laizquierdadiario.com/Renta-basica-universal-una-solucion-capitalista-a-los-males-del-capitalismo?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter#comentarios Consultado: 5/07/2018

MOUFFE, CH., (1999): *El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical*, Barcelona, Paidós.

MUNDÓ, J., (2018): *Antoni Domènech, la afirmación de la tradición republicano-democrática: epistemología, historia, ética y política*, Sin Permiso, Enero, 359-378. Disponible:

http://www.sinpermiso.info/sites/default/files/escritos_sp_antoni_domenech.pdf

Consultado: 30/07/2018

PEÑA, J., (2005): *Ciudadanía republicana y virtud cívica*, en BERTOMEU, M, J., DOMÈNECH, A., DE FRANCISCO, A., (Eds.) (2005): *Republicanismo y Democracia*, Madrid, Miño y Dávila.

PÉREZALBERDI, M^a REYES., (2008): *Democracia y Participación*, Revista catalana de dret públic, 37, 343-370.

PETRELLA, R., (1991), *Los límites de la competitividad*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana.

PETTIT, P., (2005): *La libertad republicana y su trascendencia constitucional*, en BERTOMEU, M, J., DOMÈNECH, A., DE FRANCISCO, A., (Eds.) (2005): *Republicanismo y Democracia*, Madrid, Miño y Dávila.

PETTIT, P., (1997): *Republicanism*, Oxford, Clarendon Press.

PIQUERAS, A., (2014): *La opción reformista, entre el despotismo y la revolución: una explicación del capitalismo histórico a través de las luchas de clase*, Madrid, Anthropos

PIQUERAS, A., (2017): *La tragedia de nuestro tiempo. La destrucción de la sociedad y la naturaleza por el capital. Análisis de la fase actual del capitalismo*, Barcelona, Anthropos.

PIQUERAS, A., (2018): *Las sociedades de las personas sin valor: Cuarta Revolución Industrial. Des-substanciación del capital, desvaloración generalizada*, El Viejo Topo.

RAMÍREZNÁRDIZ, A., (2012): *Guía práctica de la democracia participativa. Conocer la democracia participativa y aprender a usarla*, Madrid, Dykinson, S.L

RAMÍREZNÁRDIZ, A., (2014): *La participación como respuesta a la crisis de la representación: el rol de la democracia participativa*, Revista de Derecho Político, nº90 mayo-agosto, 170-210. Disponible:

<http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:DerechoPolítico-2014-90-6025&dsID=Documento.pdf>

RAVENTÓS, D., Y DE FRANCISCO, A., (2005): *Republicanismo y renta básica de ciudadanía*, en BERTOMEU, M, J., DOMÈNECH, A., DE FRANCISCO, A., (Eds.) (2005): *Republicanismo y Democracia*, Madrid, Miño y Dávila.

- ROBESPIERRE, M., (2005): *Por la felicidad y por la libertad: discursos*, El Viejo Topo
- RODRÍGUEZ-AGUILERA, C., (2015): *El PP como partido reaccionario*, en *eldiario.es*.25/04/2015. Enlace: https://www.eldiario.es/agendapublica/nueva-politica/PP-partido-reaccionario_0_381112341.html
- ROMEO, MARÍA CRUZ., (1993): *Entre el orden y la revolución. La formación de la burguesía liberal en la crisis de la monarquía absoluta (1814-1833)*, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert.
- ROMERO, A., (2010): *Elementos y fundamentos para la teoría y estrategia de la transición socialista latinoamericana y mundial*, Lima, 25-28, 80-84, 94-96 Recuperado en: <https://fisyp.org.ar/document/libro-elementos-fundamentales-para-la-teoria-y-est/>
- RUBIO CARRACEDO, J., (2007): *Teoría crítica de la ciudadanía democrática*, Trotta.
- SARTORI, GIOVANNI, (1998): *Homo videus: la sociedad teledirigida*, Madrid, Tauris, 105-145.
- SEBASTÍA, ENRIC Y JOSÉ ANTONIO PIQUERAS, (1987): *Pervivencias feudales y revolución democrática*, València, IVEI.
- SEBASTÍA, ENRIC Y JOSÉ ANTONIO PIQUERAS, (1991): *Agiotistas, negreros y partisanos. Dialéctica social en vísperas de la revolución Gloriosa*, València, IVEI.
- SÁNCHEZ MORÓN, M., (1980): *La participación del ciudadano en la administración pública*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales.